

HILDEBRANDT

en sus trece



La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, saluda a Fernando Rospigliosi, quien ha prometido "barrer" a los jueces que desobedezcan

¡Ya estamos en los 90!

(2, 3 y 4)

El canciller naranja

(5)



La resistencia del sur

(8 y 9)

MATICES: No hay que tenerles miedo

(16)

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la titular de la Corte Suprema, Janet Tello, posan sonrientes y felices el jueves 11. Un día antes la Junta Nacional de Justicia había suspendido al juez Richard Concepción Carhuacho.



Volviendo a los 90

► La máquina del tiempo se ha echado a andar y la presidenta del Poder Judicial se reúne amablemente con quien ha anunciado que el fujimorismo "barrerá" a los jueces rebeldes. Esa purga ya tiene a sus primeras víctimas y en la lista de las próximas están todos lo que se enfrentaron al sistema corrupto tramado por Fuerza Popular

AMÉRICO ZAMBRANO

Keiko Fujimori aún no ha sido proclamada presidenta. Pero cuando asuma el cargo, lo hará en condiciones que ningún mandatario peruano ha tenido desde la caída del régimen de su padre hace más de dos décadas.

Se trata del mayor nivel de concentración de poder desde los años 90. Hasta ahora el fujimorismo y sus aliados han logrado controlar el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional

de Justicia (JNJ), tres instituciones clave del sistema judicial.

Gracias a decisiones adoptadas por el TC y la JNJ, fiscales destituidos o investigados por presuntos actos de corrupción y crimen organizado recuperaron posiciones de poder dentro de la Fiscalía de la Nación, mientras aquellos que investigaron a políticos poderosos, incluida la propia Keiko Fujimori, fueron apartados, destituidos o enfrentan procesos que amenazan con expulsarlos definitivamente de la institución.

El único contrapeso institucional que todavía parecía

mantener cierta autonomía era el Poder Judicial. Eso también está cambiando.

La señal más evidente proviene de la propia cabeza de la institución. Mientras la JNJ aparta, uno a uno, a los magistrados más incómodos para el poder político, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, guarda silencio.

Su actitud contrasta con la ofensiva impulsada desde el Congreso. Durante las últimas semanas el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, llamó públicamente a "barrer el sistema judicial" y exigió "soluciones radicales" contra los jueces que se resistían a aplicar

las denominadas leyes de impunidad y procrimen aprobadas por la coalición parlamentaria.

Tello no ha dicho una sola palabra sobre esta arremetida. Tampoco hubo un solo pronunciamiento de la Corte Suprema cuando la JNJ decidió no ratificar al juez superior titular Oswaldo Ordóñez Alcántara, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima. Meses antes Ordóñez había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Congreso había aprobado un conjunto de normas que atentaban contra la independencia de jueces y fiscales y que favo-

recían la erosión de las instituciones de justicia.

El magistrado dejó la judicatura después de 42 años de carrera ininterrumpida en la administración de justicia y sin una sola sanción disciplinaria. De acuerdo con información recogida por este semanario en distintas fuentes del Poder Judicial, Tello ni siquiera se comunicó con Ordóñez tras la decisión.

Fuentes judiciales indicaron además que, tras la no ratificación del magistrado, algunos jueces promovieron la convocatoria de una Sala Plena para reclamar una defensa institucional de la independencia judicial frente

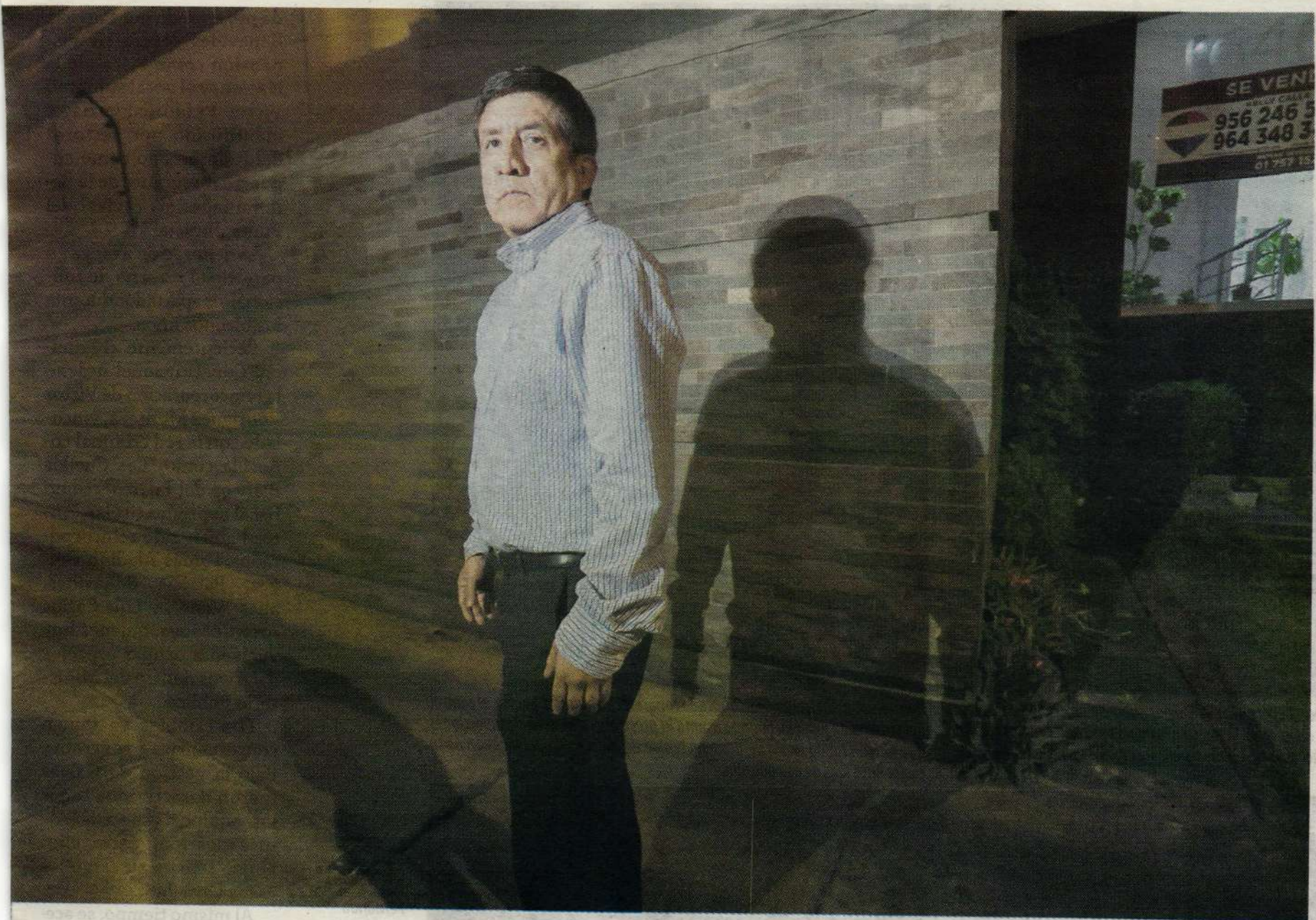


FOTO CESAR ZAMALLOA • HT3

El suspendido juez Richard Concepción Carhuancho, quien en 2018 envió a prisión preventiva a Keiko Fujimori por el caso Cócteles, enfrenta ahora solo y sin apoyo institucional el acoso de la JNJ. Su destitución parece inminente.

a los hostigamientos de la JNJ. La iniciativa no llegó a concretarse.

La salida de Ordóñez, un magistrado con gran influencia dentro de la institución, provocó pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales que calificaron la decisión de la Junta como una represalia por sus críticas a las leyes del Congreso. En cambio, la máxima autoridad del Poder Judicial no emitió una declaración pública en su defensa ni expresó respaldo institucional frente a lo ocurrido.

Tello mantuvo una conducta similar cuando la misma Junta abrió una investigación disciplinaria con fines de destitución contra el juez Jorge Chávez Tamariz, luego de que este se negara a aplicar la ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad por considerarla contraria a los tratados internacionales suscritos con el Perú.

Lo mismo ocurrió cuando la JNJ suspendió por seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho, uno

de los magistrados más reconocidos del sistema anticorrupción.

Concepción Carhuancho, quien en 2018 envió a prisión preventiva a Keiko Fujimori por el caso Cócteles, aseguró a este semanario que la presidenta del Poder Judicial no se comunicó con él ni expresó respaldo alguno tras su suspensión ocurrida el miércoles 10.

La medida lo apartó de inmediato de sus funciones. Desde entonces, enfrenta solo y sin apoyo institucional los procesos disciplinarios que podrían determinar su salida definitiva del Poder Judicial.

Dentro de la institución varios jueces observan con preocupación lo que consideran una persecución de la JNJ contra magistrados que cuestionan las leyes promovidas por el fujimorismo y sus aliados en el Congreso o que dictaron resoluciones adversas a líderes políticos de ese sector.

Por eso ha llamado especialmente la atención la actitud de Tello. Hasta hace pocos meses la pre-

sidenta del Poder Judicial defendía públicamente la independencia de la institución frente a las injerencias políticas. Hoy evita cuestionar las decisiones de la JNJ contra jueces de su propia institución.

¿Por qué? Una escena reveladora ocurrida el 11 de junio ofrece algunas luces.

Apenas un día después de la suspensión de Richard Concepción Carhuancho, Tello se reunió con Fernando Rospigliosi en el Congreso. El encuentro ocurrió poco antes de que el pleno aprobara una norma que otorgaba mejoras salariales a los trabajadores del Poder Judicial.

Se trataba del mismo congresista que había exigido perseguir a los jueces que se resistían a aplicar las leyes impulsadas por el Parlamento.

La fotografía difundida por el Congreso muestra a ambos sonrientes y estrechándose la mano. Más tarde, Tello siguió el debate desde uno de los palcos del Hemiciclo y aplaudió de pie la aprobación de la norma.

Consultada ese mismo día por una periodista de "Epicentro" sobre la no ratificación del juez Ordóñez, la presidenta del Poder Judicial evitó responder. "Más bien lo que me merece es un agradecimiento ahora al Congreso porque hemos conseguido una ley que beneficia a miles de trabajadores del Poder Judicial y otras instituciones", afirmó.

"¿No puede detallar acerca del tema?", insistió la reportera. "No. En este momento estoy aquí en el Congreso específicamente por este tema", respondió Tello.

Tres magistrados consultados para este reportaje consideran que las amenazas de Rospigliosi, sumadas a los procesos de ratificación impulsados por la JNJ, han instalado un clima de terror dentro de la institución. Algunos hablan de presión. Otros van más lejos y describen un escenario de creciente sometimiento institucional.

Los casos de Ordóñez y Concepción Carhuancho permiten entender mejor

el tipo de magistrados que hoy están siendo retirados del sistema judicial.

En el caso Ordóñez, la JNJ concluyó que un juez no podía afirmar públicamente que una mayoría parlamentaria estaba debilitando el sistema de justicia. La decisión se basó en las declaraciones que el magistrado ofreció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2024, donde denunció que diversas leyes aprobadas por el Congreso favorecían la impunidad y el crimen.

Para la mayoría de los consejeros esas afirmaciones revelaron una presunta posición política incompatible con la función judicial. La Junta llegó incluso a sostener que tales expresiones podían ser formuladas por cualquier ciudadano, pero no por un magistrado.

El razonamiento resulta sorprendente porque el propio proceso no identificó cuestionamientos a su trayectoria, desempeño, conducta ética o antecedentes disciplinarios. Pese a ello, Ordóñez no fue ratificado. ▶



FOTO CÉSAR ZAMALLON • HT3

Juez Oswaldo Ordóñez: la JNJ no lo ratificó por haber denunciado que diversas leyes aprobadas por el Congreso favorecían la impunidad y el crimen. Acabaron con una carrera intachable de 42 años ininterrumpidos en el Poder Judicial.



FOTO JOEL DURÁN • HT3

Keiko Fujimori: a través de su bancada congresal ha logrado, por fin, el control del sistema de justicia. Cuando asuma la presidencia, lo hará en condiciones que ningún mandatario peruano ha tenido desde la caída del régimen de su padre hace más de dos décadas.

da presentada por Patricia Benavides contra su suspensión como Fiscal de la Nación, y el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga, identificado por sectores del fujimorismo como supuesto integrante de la denominada "ala caviar" del Poder Judicial.

La depuración avanza en paralelo al retorno de funcionarios apartados durante los últimos años.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ordenó la reincorporación de Víctor Rodríguez Monteza, vinculado con la red criminal conocida como "Los Cuellos Blancos del Puerto", como fiscal supremo titular. Antes habían sido reincorporados Tomás Aladino Gálvez, Patricia Benavides, alias "Vane", y Luis Carlos Arce Córdova, quienes hoy vuelven a ocupar espacios decisivos dentro del Ministerio Público.

Los cambios ya tienen consecuencias concretas. Bajo la gestión de Gálvez fueron desactivados todos los equipos especiales de investigación, entre ellos el que tenía a su cargo los casos Lava Jato.

Al mismo tiempo, se aceleraron los procesos disciplinarios contra Rafael Vela Barba, el fiscal coordinador que impulsó las investigaciones de lavado de dinero más importantes de los últimos años. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que Vela Barba podría ser separado de sus funciones por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público antes del 28 de julio.

Nada de esto es obra de la casualidad. Durante los últimos cinco años el fujimorismo y sus aliados concentraron esfuerzos en capturar las instituciones de justicia. El control del TC, la Defensoría, la JNJ y ahora el sometimiento progresivo del Poder Judicial eran piezas de una misma estrategia.

Cuando la hija de Alberto Fujimori llegue finalmente a Palacio, muchos de los jueces y fiscales que investigaron a su partido, enviaron a prisión a sus dirigentes o cuestionaron las normas promovidas por su bancada habrán desaparecido de escena. La "señora K" tendrá el control suficiente para ejercer el poder a su antojo. ■



Fernando Rospigliosi
@Frospigliosi

Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!

14:42 - 30 ene 2026 - 40,8 mil Reproducciones

Tuit de Fernando Rospigliosi del pasado 30 de enero. Su llamado a barrer el sistema judicial está siendo cumplido al pie de la letra por la Junta Nacional de Justicia alineada al pacto corrupto del Congreso.

El caso de Concepción Carhuanchu, quien también se negó a aplicar una ley aprobada por el Parlamento que modificaba los delitos de lesa humanidad, no es menos sorprendente.

La JNJ lo suspendió por haber incluido una fotografía de Nicanor Boluarte en una diapositiva utilizada durante una exposición académica sobre prisión preventiva. También le atribuyó haber solicitado que esa imagen fuera retirada posteriormente del registro audiovisual del evento.

Durante el proceso la Junta llegó incluso a cuestionar que el magistrado hubiera dictado conferencias en institutos privados

y cantado "Triciclo Perú" al cierre de una actividad cultural.

Concepción Carhuanchu rechaza los cargos que motivaron su suspensión y sostiene que el principal expediente en su contra ya había sido archivado en varias oportunidades por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

"La Junta me ha impuesto una medida cautelar por hechos que ya han sido archivados", afirmó en una entrevista con este semanario.

Según explicó, la investigación relacionada con la exposición académica en la que apareció una fotografía de Boluarte fue archivada en tres ocasiones por los órga-

nos de control del propio Poder Judicial. Aun así, la Junta decidió reabrir el caso y utilizarlo como sustento para apartarlo de sus funciones durante seis meses.

El magistrado también rechazó los cuestionamientos por haber dictado conferencias en instituciones no universitarias y por haber cantado "Triciclo Perú" durante una actividad pública realizada en 2025.

"Solamente canté y, así como canté, me retiré", señaló.

Pese a considerar que su suspensión "no está ajustada a derecho", aseguró que la acatará mientras prepara su defensa. "Yo me siento tranquilo a pesar de que se

me impuso una decisión injusta", sostuvo.

Ordóñez y Concepción Carhuanchu tampoco parecen casos aislados.

La lista ya incluye al ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, no ratificado por la JNJ, y al fiscal José Domingo Pérez, suspendido luego de que presentara una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

Ahora, según fuentes consultadas por esta revista, otros magistrados aparecen en el radar de la Junta. Entre ellos figuran el juez Jorge Chávez Tamariz, el magistrado constitucional John Paredes, quien en 2023 rechazó una deman-

El canciller naranja

► La simpatía de Carlos Pareja por Fuerza Popular, demostrable a lo largo de su carrera, ¿tuvo algo que ver con la orden de no digitalizar las actas de votación de los peruanos en el exterior?

ELOY MARCHÁN

Su nombramiento no fue casualidad. El funcionario a cargo de organizar y supervisar las elecciones en el extranjero es un diplomático que hizo carrera durante el fujimorato. Se trata de Carlos Pareja Ríos, nombrado canciller después de la primera vuelta. Es fujimorista y no lo oculta. En su Facebook personal tiene fotos con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor cubano-estadounidense que contrató la candidata. Pareja es el responsable de que no se hayan digitalizado las actas electorales del extranjero.

Carlos Pareja, de 75 años, estaba en sus cuarteles de invierno cuando el 23 de abril fue llamado para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ese entonces ya se sabía que Fujimori estaba en segunda vuelta y que Roberto Sánchez iba a ser su rival. El día en que Pareja juró al cargo también lo hizo Amadeo Flores, en su caso como ministro de Defensa. Entre los méritos de Flores, según su foja de servicios, destaca haber sido asesor de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán.

La trayectoria diplomática de Carlos Pareja está marcada por haber ocupado cargos de confianza durante el régimen fujimontesinista. Fue director de Asuntos Sudamericanos de la Cancillería de 1990 a 1993, ministro consejero de la embajada peruana en Chile entre 1993 y 1997, asesor de la vi-

cecancillería en 1997 y 1998, cuando la cartera estaba a cargo de Francisco Tudela. También fue director de Soberanía y Desarrollo Fronterizo entre 1998 y 2000. Y entre sus responsabilidades estuvo la negociación del acuerdo de paz con Ecuador.

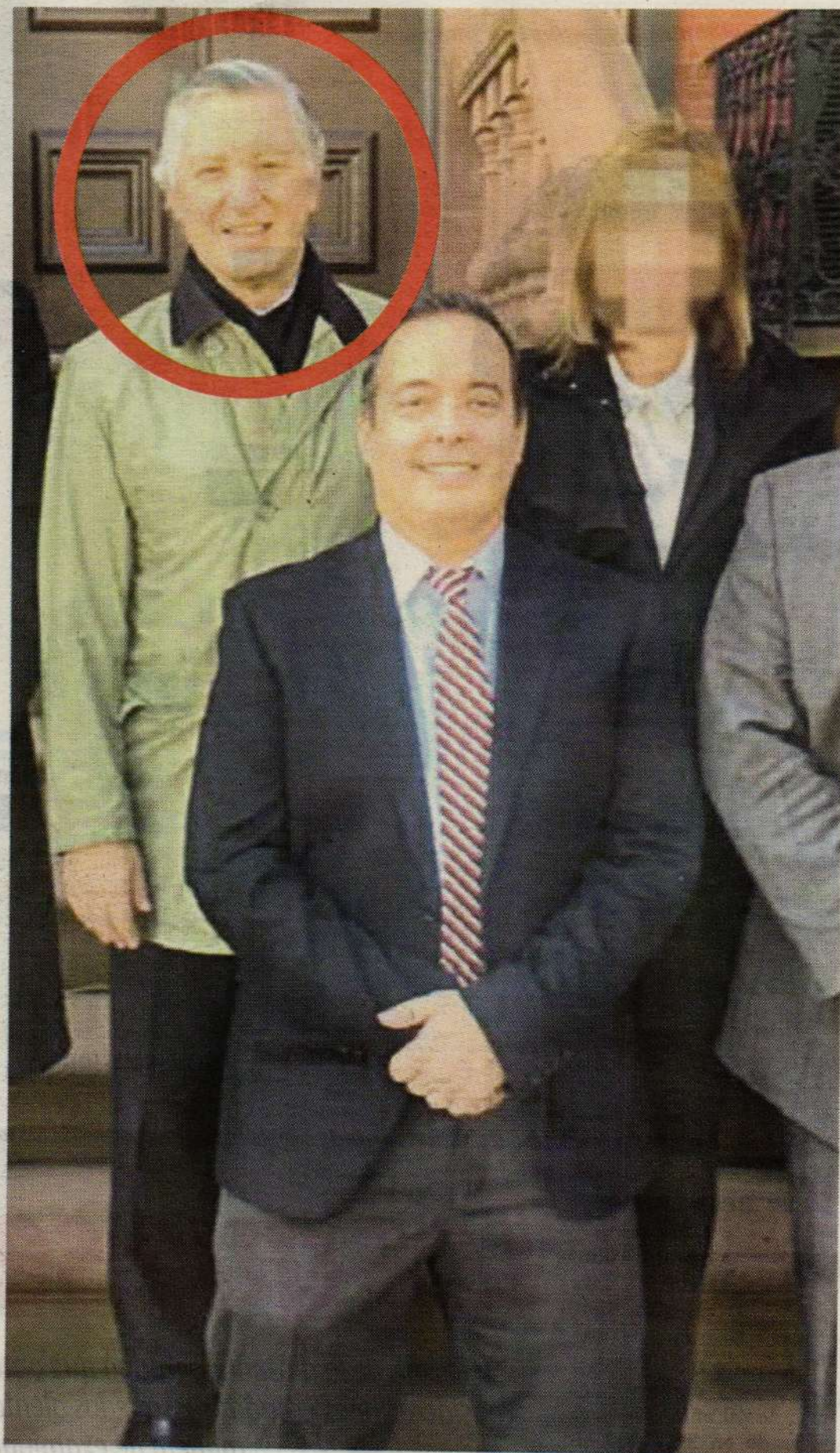
Para agradecer su fidelidad y sus servicios, en 1998 Alberto Fujimori ascendió a Pareja al grado de embajador e inmediatamente lo destacó en la embajada de España, uno de los destinos más anhelados por la diplomacia local. Para ese tiempo el fujimontesinismo ya había hecho metástasis.

“Para que en tu segundo año de embajador te envíen a Madrid, tienes que ser muy cercano al canciller o al presidente de turno. Esa es la explicación de la buena suerte que tuvo Pareja en los noventa”, dice un embajador que pidió la reserva de su nombre.

De vuelta al ruedo de la primera línea de la política, Pareja actuó rápido. Sólo dos semanas después de enfundarse el fajín de canciller, envió un oficio a la ONPE pidiéndole hacer un cambio de última hora. En el encabezado del documento se lee: “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Vuelta Presidencial 2026”. Se trata de un manual de cómo deben actuar los 77 cónsules durante la votación de los 1,2 millones de peruanos en el exterior.

Pareja pidió a la ONPE eliminar un procedimiento que se ha realizado desde el 2011 en las primeras y segundas vueltas: la digitalización de

El canciller Carlos Pareja junto a Carlos Díaz-Rosillo, el asesor cubano-norteamericano de Keiko Fujimori. La foto es del 2020 y está en el Facebook personal de Pareja.



todas las actas extranjeras apenas eran entregadas por los miembros de mesa. Los PDF luego eran enviados a la ONPE por correo electrónico oficial.

La ONPE aceptó la solicitud de la Cancillería y el 29 de mayo pasado, a nueve días del balotaje, emitió la Resolución Jefatural N° 90-2026 disponiendo que los cónsules no cumplan con la tarea de escanear las actas.

De tal manera que para que los votos de los peruanos en el exterior entraran al cómputo de la ONPE había que esperar a que llegaran a Lima las actas

y las cédulas. La ONPE alquiló la sede del Club Departamental Cusco, en Jesús María, para almacenar toda la documentación electoral que arribó desde el exterior.

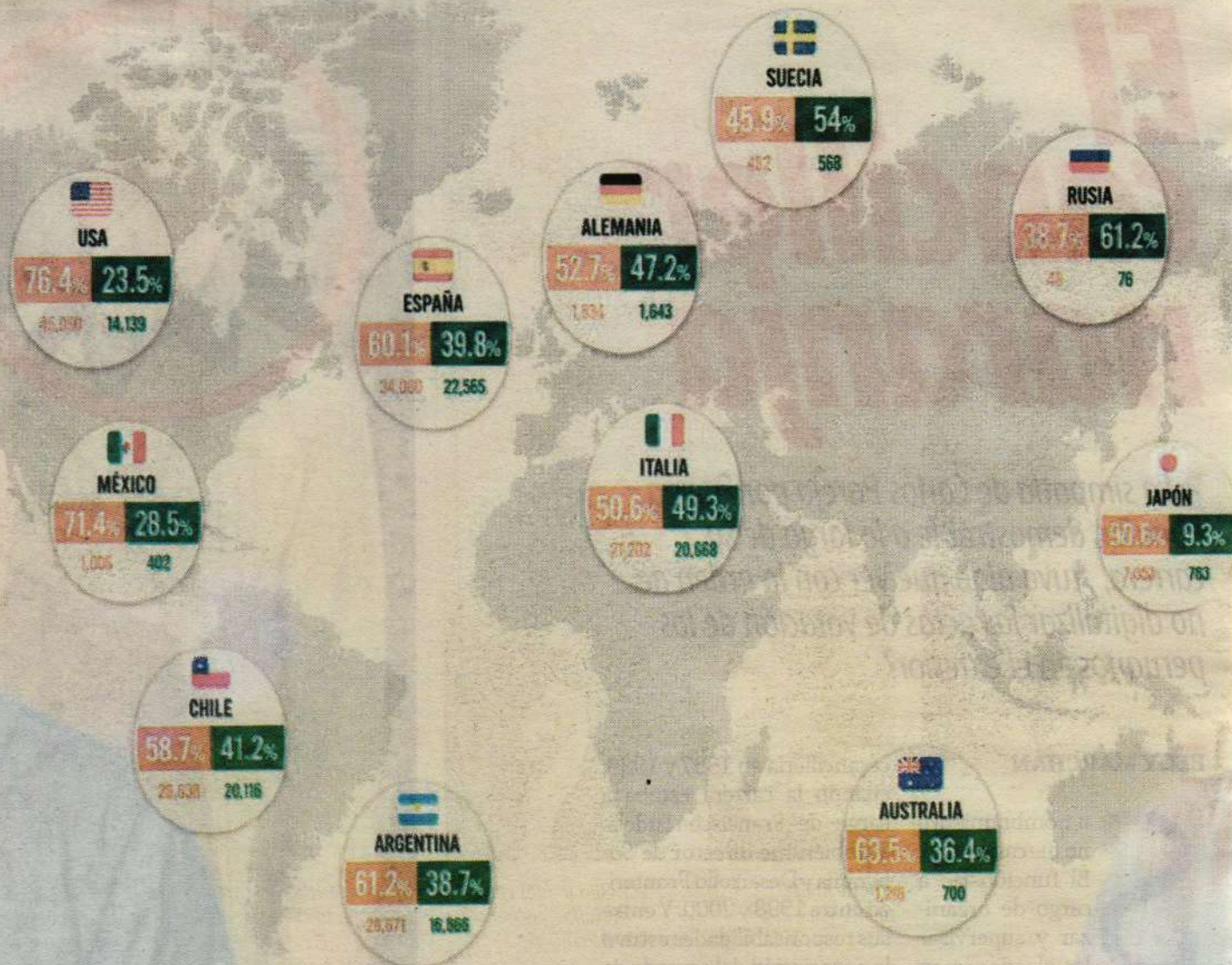
Desde Cancillería están deslizando la versión de que el pedido que hizo Pareja se debió a la Ley 32299 que dio el actual Congreso en abril del 2025 para regular el recuento de votos. La Ley de marras también fue impulsada por el fujimorismo. Pero en ninguna parte del texto se dispone que las actas del extranjero no sean escaneadas.

Si no fuera por la vota-

ción en el exterior, Fujimori habría perdido una elección por cuarta vez consecutiva. Al cierre de esta edición y al 99,4% de actas contabilizadas, la “señora K” le llevaba 34,602 votos a Sánchez. La diferencia es menos de la mitad de la ventaja que sacó Fujimori en el exterior: 81,249 votos.

En la llegada de los votos del extranjero hubo eventos fuera de la lógica. Las actas de Japón llegaron antes que las de Argentina. Lo mismo ocurrió con los votos de Alemania o Suecia que arribaron antes

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



327,766
VOTOS EMITIDOS

1'210,813
ELECTORES HÁBILES

72%
DE AUSENTISMO

Keiko Fujimori se impuso sobre Roberto Sánchez por 81,249 votos en el extranjero. Fuerza Popular obtuvo 194,625 votos frente a los 113,307 de Juntos por el Perú.

FABRICIO CABRERA BUDEN

Ernesto Riofrío Liza asegura que nunca le interesó ir a votar durante los más de 40 años que lleva viviendo en Estados Unidos. El 2021 hizo una excepción cuando sintió que un "candidato comunista" podía llegar al poder en el Perú. Entonces acudió a las urnas para respaldar a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo. La derrota del fujimorismo lo dejó con la sensación de una cuenta pendiente. Por eso volvió a votar el 2026. Dice que fue su revancha. Riofrío tiene 62 años y vive en Nueva Jersey desde 1986.

"Yo pensé que si ganaba ese tipo (Roberto Sánchez) estábamos muertos porque me hace recordar al terrorismo. Acá muchos peruanos

Los que se fueron

► El voto de la diáspora peruana que optó por el fujimorismo se nutre de consideraciones económicas, miedos alentados por la prensa y una singular manera de examinar el pasado

en Estados Unidos dijimos: 'No, man, tenemos que votar por Keiko para que no haya más terrorismo en el Perú'. El país tiene agua y luz gracias a lo que hizo el señor Fujimori en los noventa. Dicen que robó. *I don't care* (no me importa). Él puso la primera piedra de lo que es el país hoy. Todos estamos contentos por el triunfo de Keiko", señala.

Riofrío Liza tomó la decisión de hacer las maletas e irse del país después de presenciar la explosión de un coche bomba mientras esperaba

un bus en la avenida Perú. Era 1985. Desde entonces no ha regresado. De confirmarse la victoria de Keiko —dice— se anima a pasar sus últimos años en Perú.

"Yo tengo amigos míos que votan por Sánchez, pero quieren venir a Estados Unidos. O sea, si odian el capitalismo, ¿por qué quieren venir acá? De corazón me salió votar por Keiko y estoy muy feliz. Que maneje lo que sea, pero que no tumbé la economía", señala.

Son 327,766 los peruanos que residiendo en el

extranjero acudieron a votar en esta segunda vuelta. La cifra representa el 27% de 1'210,813 electores migrantes habilitados para sufragar. El ausentismo alcanzó el 72%.

Riofrío Liza es parte de los más de 45 mil votos que Keiko Fujimori obtuvo en Estados Unidos. En ese país la candidata recibió cerca del 76% de los votos válidos.

Javier Quezada Medina tiene 50 años, es abogado y vivió en Trujillo hasta el 2021. Ese año decidió marcharse del país junto con su

esposa y sus tres hijos tras la elección de Pedro Castillo. "Yo tenía claro lo que significaba un gobierno como el de Castillo. Hablé con mi esposa y le dije que si ganaba, nos íbamos", dice.

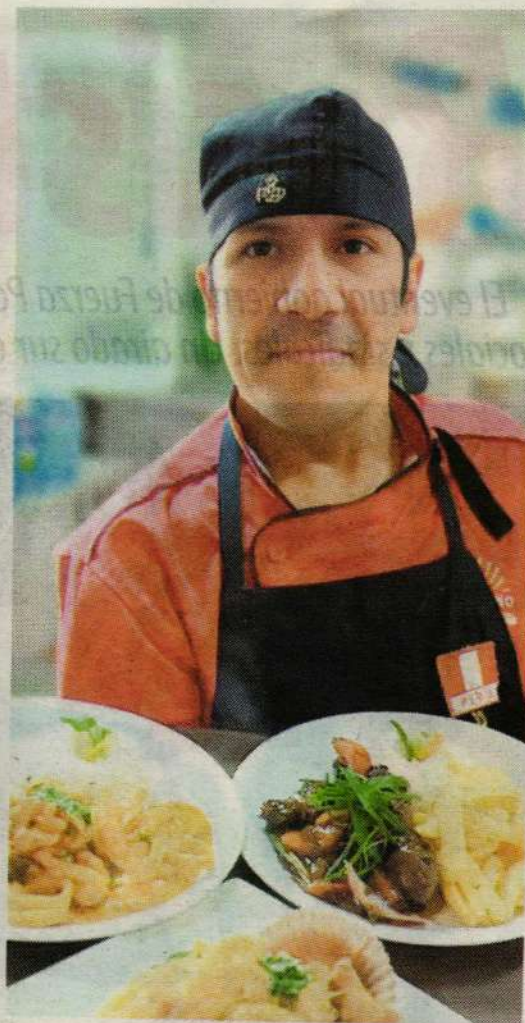
En noviembre del 2021 se instalaron en Naperville, en los suburbios de Chicago. No regresaron ni por vacaciones.

Aun cuando niega ser fujimorista militante, dice que ver en campaña a la vieja dirigencia albertista fue decisivo para inclinar su voto a favor de Keiko, tanto en primera como en la segunda vuelta.

"Martha Chávez, por ejemplo, me dio más confianza para apoyar a Keiko. También ver a Jaime Yoshiyama. Escuchar a (Luisa María) Cuculiza me daba confianza porque son personas que cambiaron el país en los noventa", señala. "Después del gobierno de



Ernesto Riofrío Liza (62): Llegó a Estados Unidos en 1986, cuando tenía 22 años. "De corazón me salió votar por Keiko y estoy muy feliz. Si gana, regresaré a Perú".



José Alfredo Tello Herrera (53) vive en Chile desde 2011. "A Keiko la tildaron de todo, pero nunca se dio a torcer. Nos demostró que al final del túnel siempre hay luz. Es un ejemplo de mujer".



Marcial Carrillo Bustamante dejó el Perú en 2001 y hoy reside en Madrid. Respaldó a Keiko Fujimori en ambas vueltas. "Keiko dio la cara ante la justicia y nunca se la encontró culpable".



Ángela Castro Gurmendi siguió la campaña peruana desde Argentina y votó por Keiko Fujimori en segunda vuelta. "Siempre ha tenido una buena actitud y no ha fomentado la violencia".

La politóloga Katherine Zegarra sostiene que los peruanos en el extranjero suelen votar pensando más

en la estabilidad económica que en los problemas cotidianos que enfrentan quienes viven en el país. "No les

afecta la criminalidad porque no viven en el Perú. El voto de los peruanos en el extranjero tiene un tinte

más económico que social", señala.

En Latinoamérica una de las migraciones peruanas que prefirió a Fujimori frente a Sánchez fue la residente en Chile, donde la candidata obtuvo 28,638 votos (58%). José Alfredo Tello Herrera tiene 53 años y vive en el país sureño desde el 2011. "Alberto Fujimori es el mejor presidente del Perú. Gracias a él terminamos con el terrorismo. Yo tengo familia muerta por los terroristas. Estabilizó la situación económica, el trabajo. En el Perú, 30 años después, seguimos con el sol. Otros países no tienen eso", señala.

Rosario del Pilar López vive en Santiago hace 21 años y dice que votó por Keiko por un tema de género. "Yo soy aprista a muerte, pero quiero que gobierne una mujer en el país. Me gustó mucho acá 'la Bachelet'. Preferimos que gane un ratero conocido que uno por conocer como Sánchez. Sí, quisiera que Keiko sea como una Bachelet en el sentido de fuerza, orden y decisión. Por ahí iba el perfil que buscaba", señala.

Desde Argentina Ángela Castro Gurmendi es parte de los 26,671 votos que consiguió Fujimori en la segunda vuelta. Un 61% del total de votos que podía obtener en el país gobernado por Milei.

"Es una persona que ha participado muchas veces en elecciones y que, cuando ha perdido, ha aceptado los resultados. Para mí, siempre ha tenido una buena actitud y no ha fomentado la violencia. Todo lo que dicen de ella es mentira. Ella no promueve la violencia ni la lucha armada como sí ocurre con algunos sectores de la izquierda", señala.

José Tello, presidente del Instituto Aklla, sostiene que el voto de los peruanos en el extranjero no es marginal. Recuerda que el padrón electoral fuera del país supera los 1,2 millones de electores, una cifra comparable a la de regiones enteras como Arequipa, Cusco, Junín o Lambayeque.

"Cuando hablas del voto en el extranjero, hablas de un distrito electoral enorme. Tiene un volumen equivalente al de regiones completas del país", señala Tello. ■

La eventual victoria de Keiko Fujimori ha golpeado el sur del país, donde su rival Roberto Sánchez acaparó el 70% de los votos, según los resultados de la ONPE. Los dirigentes de las organizaciones sociales reconocen que temen por el futuro.

“Es lamentable decir que si la señora Fujimori entra como mandataria, las víctimas no vamos a alcanzar justicia. El escenario lo vemos bastante perdido. Yo ya no me expongo a la prensa porque no quiero que en el futuro me acusen de terrorista por pedir justicia”, dice Ruth Bárcena, representante de la Asociación de familiares de asesinados y heridos el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho.

En esa línea opina Helio Cruz, abogado especializado en derechos humanos y, hasta inicios de año, coordinador de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras en Cusco. “Se viene un escenario complicado. Lo que intentará hacer el próximo gobierno es limpiar de las acusaciones de homicidio a quienes participaron en la represión de las marchas contra Dina Boluarte o a quienes cometieron abusos en los noventa”, señala.

Lugue Espinoza, secretario general de Construcción Civil en Arequipa, está preocupado por las promesas de Fujimori en campaña. Especialmente, aquella de que gobernará como su padre. “Alberto Fujimori abolió la estabilidad laboral, nos quitó muchos derechos y acabó con los sindicatos”, dice el dirigente. “Lo que se viene es un gobierno autoritario que pondrá todo el marco legal a favor de las mineras. Mientras tanto, nosotros vemos cómo la empresa Southern tira agua contaminada al mar”, dice Olga Mamani, dirigente en Moquegua del Comité Nacional Unitario de Lucha (CNUL).

“Tememos que con Fujimori la agenda que se había avanzado a favor de la mujer y otros grupos

Resistencia

► El eventual gobierno de Fuerza Popular genera reacciones virulentas en organizaciones sociales y sindicales. Un airado sur empieza a mandar delegados a Lima



Diversas organizaciones del sur están enviando representantes a Lima para protestar contra los resultados electorales que proyectan una victoria de Keiko Fujimori. Las dos imágenes de esta página corresponden a las marchas realizadas en la capital el sábado 13.





Fedra Rodríguez, vocera del Comité Multisectorial de Mujeres de Tacna: "Da mucho miedo pensar en lo que pasará, pero la izquierda tiene que unirse en torno a un programa común. Vamos a tener que armar una resistencia".



FOTO ARCHIVO • HT3

Claudio García, representante del Frente de Defensa de San Román: "Hay indicios de fraude y hubo intervencionismo del embajador estadounidense Bernie Navarro".



Edith Calisaya, presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras "Bartolina Sisa": "Mis hermanos mayores recuerdan que el papá de Keiko Fujimori anuló la libertad de expresión. La gente no podía hablar o salir a protestar".



Helio Cruz, abogado de derechos humanos en el Cusco: "Se viene un escenario complicado. Lo que intentará hacer el próximo gobierno es limpiar de las acusaciones de homicidio a quienes participaron de la represión en las marchas contra Dina Boluarte o quienes cometieron abusos en los noventa".



FOTO JOSÉ SOTOMAYOR

Luge Espinoza, secretario general de Construcción Civil en Arequipa: "Alberto Fujimori abolió la estabilidad laboral, nos quitó muchos derechos y acabó con los sindicatos".



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3

Lucio Ccallo, presidente del Comité Colegiado de Organizaciones de Puno: "Rechazamos profundamente estos resultados. No vamos a reconocer a Keiko Fujimori como presidenta".

vulnerables sufra un gran retroceso", señala Fedra Rodríguez, presidenta del Comité Multisectorial de Mujeres de Tacna.

"Estamos preocupados porque si Keiko Fujimori entra como presidenta todo va a ser peor. Mis hermanos mayores recuerdan que su papá anuló la libertad de expresión. La gente no podía hablar o salir a protestar. No podemos permitir que eso se repita", agrega Edith Calisaya, presidenta de la Organización

de Mujeres Aymaras "Bartolina Sisa", de Puno.

Según el conteo oficial de la ONPE, en Puno el 86% de la población votó por Juntos por el Perú, mientras que Fuerza Popular obtuvo el 13%. Es la región del país donde hay más organizaciones sociales que ponen en duda los resultados electorales.

"Nosotros consideramos que Fujimori y el pacto mafioso de la ultraderecha han venido preparando el fraude desde que

hubo el golpe del 2022 y cambiaron las leyes a su favor. Las organizaciones de Puno rechazamos profundamente estos resultados. No vamos a reconocer a Keiko Fujimori como presidenta", señala Lucio Ccallo Callata, presidente del Comité Colegiado de Organizaciones de Puno.

El pasado 10 de junio Ccallo anunció que sus seguidores iniciarían una huelga indefinida y bloquearían el puente que une a la ciudad de Ilave con Bolivia.

En el 2017 el Ministerio del Interior acusó a Ccallo de haber sido dirigente del Movadef. Él lo niega. "Tal vez por ahí me afiliaron, yo he dado mi firma para muchos movimientos que proponían una nueva Constitución", dice. Asegura que no espera nada bueno de Keiko Fujimori. "Esa señora se ha preparado para perpetuarse en el poder. Quien ha gobernado en estos tres años ha sido ella desde el Congreso y ha obstaculizado todas

las denuncias e investigaciones contra el gobierno que fue el responsable político de las muertes de nuestros hermanos. Ahora nos va a traer mayor maltrato y vulneración a nuestros derechos", agrega.

Claudio García, dirigente del Frente de Defensa de San Román, coincide con esa opinión. "Hay indicios de fraude y hubo intervencionismo del embajador estadounidense Bernie Navarro", señala.

David Calisaya, vocero del colectivo "No A Keiko" y dirigente estudiantil de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), tiene otro matiz. "Sería un poco irresponsable caer en el fraudismo, pero sí se puede decir que hubo irregularidades que tienen que ser atendidas", comenta.

Calisaya organizó la más reciente marcha contra el fujimorismo en la Ciudad Blanca. "Rechazamos todo lo que representa ese partido. Vemos con bastante preocupación e incluso temor un futuro gobierno de Fuerza Popular. Nos preocupa que continúen trabajando en la misma línea que han seguido en el Congreso. Que el presupuesto para las universidades siga achicándose y se reduzcan las becas. En estos procesos los fujimoristas han tenido un papel importante", dice el dirigente estudiantil.

Calisaya habla del "racismo y discriminación contra las poblaciones indígenas" que volvió a desatarse en la campaña. "Nos preocupa que estos discursos de odio se reafirmen con esta victoria dudosa de la señora Fujimori", dice.

"Vivimos en una realidad -sostiene el activista- donde se puede asesinar a peruanos sin que haya justicia. Eso genera miedo en la ciudadanía", explica. Y señala a los medios de comunicación por su responsabilidad en esta campaña. "El poder mediático desplegó un terruqueo económico contra la opción de Sánchez. Eso se replicó en las redes sociales y algunos medios de acá", dice Calisaya.

Helio Cruz cuenta que en Cusco, donde Fujimori

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



FOTO JOEL DURÁN • HT3

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso. El proyecto de ley se nutrió sustancialmente de sus "aportes".

Gusanos de la ley

► El Congreso de la coalición fujimorista da un paso firme en la construcción de un estatuto de impunidad para policías y militares que delinchan. Es un anticipo concertado de lo que viene

BRUNO AMORETTI

El Congreso se alista para evacuar otra ley procrimen. El proyecto legislativo en ciernes blindará a policías y militares frente a la justicia ordinaria. Desde el momento en que se publique en "El Peruano" el uniformado que delinca será juzgado por sus colegas en el fuero militar. La ley, que podrá aplicarse retroactivamente, abre las puertas nuevamente a la impunidad.



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

DICTAMEN APROBADO POR MAYORÍA, RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 7238/2023-CR, 7922/2023-CR, 9187/2024-CR, 11268/2024-CR, 11148/2024-CR, y 13184/2025-CR ACOMPAÑA TEXTO SUSTITUTORIO "LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, PARA PRECISAR EL DELITO DE FUNCIÓN Y ESTABLECER SANCIONES A MILITARES Y POLICÍAS QUE PARTICIPEN EN BANDAS U ORGANIZACIONES CRIMINALES"

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2025-2026

Señor Presidente:

Ha sido remitido, para estudio y dictamen de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú a la Comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, los siguientes proyectos de ley:

- El Proyecto de Ley N° 7238/2023-CR propuesto por el congresista Luis Roberto Kamiche Morante, del Grupo Parlamentario Cambio Democrático - Juntos por el Perú, mediante el cual propone: "Ley que modifica el Decreto Legislativo 961- Código de Justicia Militar y Policial".
- El Proyecto de Ley N° 7922/2023-CR propuesto por el congresista Idelso Manuel García Correa, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, mediante el cual propone: "Ley que establece la pena privativa de la libertad no menor de treinta años hasta la pena de cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que colaboren con organizaciones ilegales".
- El Proyecto de Ley N° 9187/2024-CR propuesto por el congresista Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante el cual propone: "Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Penal y del Código Penal Militar Policial para fortalecer la función policial de prevención, investigación y combate del delito".

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas
Edificio Unión Nacional Plaza de la Torre 311 - Lima - Perú
Oficina 311-01, Central Telefónica 311-0177-01000 311-0177

Página 1 de 83

Dictamen evacuado desde la Comisión de Defensa con los aportes de Renovación Popular y Fuerza Popular. Será la Comisión Permanente comandada por el fujimorismo la encargada de aprobar el texto en segunda votación.

La norma fue aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso el último viernes con 51 votos a favor. Engendrada por el fujimorismo y Renovación Popular, fue apoyada por sus satélites parlamentarios de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País y Honor y Democracia.

La nueva ley, burlándose de las sentencias de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, dice explícitamente que serán considerados "delitos de función" los ilícitos que policías cometan durante sus labores de "investigación, control de identidad, inteligencia, cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, de vigilancia y control de fronteras (...), así como otras funciones establecidas en sus leyes y reglamentos". Es decir, si el militar o el policía delinquen mientras están trabajando, están exonerados de sentarse en un banquillo del fuero civil.

Para el personal militar también señala explícitamente que serán juzgados en el fuero militar cuando cometan un ilícito "durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento

del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas".

"Se le está diciendo a la Corte Suprema que resuelva siempre a favor de la justicia penal militar. Esto lo único que va a hacer es generar un ambiente de impunidad terrible y miedo", afirma Julissa Mantilla, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"El proyecto incluye los delitos de función que pudieran cometer policías y militares en un contexto de estado de emergencia -agrega Mantilla-, por ejemplo, cuando están 'garantizando' el orden público en las protestas. Este proyecto, además de presionar al Poder Judicial, está desconociendo y criminalizando la protesta".

Los especialistas consultados coinciden en que estos cambios abren la puerta a la impunidad para los policías y militares vinculados con organizaciones criminales, actos de corrupción o negligencias cometidas durante el ejercicio de sus funciones.

"La modificación no hace ninguna excepción. Prácticamente incluye cualquier delito que pudieran cometer los militares o policías", afirma



FOTO ARCHIVO • HT3

Anthony Crespo, abogado de los deudos de la masacre de Colcabamba: "Acudiremos a instancias internacionales si es necesario para preservar la investigación y buscar justicia (...) Es una ley que preocupa, estamos retrocediendo 25 años".

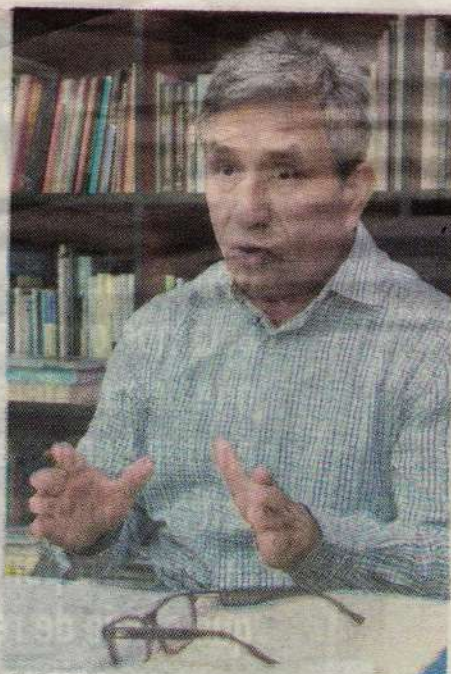


FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal: "La modificación apunta directamente a los casos por muertes ocurridas durante protestas sociales entre 2020 y la actualidad. Corren un grave riesgo de que se archiven en el fuero civil".



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3

Mar Pérez, abogada de deudos de víctimas en protestas sociales: "Hasta ahora, lo único que nos protege de este tipo de decisiones es la facultad de los jueces de aplicar el control difuso. Y precisamente por eso es que hay amenazas a su independencia".



Julissa Mantilla, expresidenta de la Corte IDH: "Se le está diciendo a la Corte Suprema que resuelva siempre a favor de la justicia penal militar. Esto lo único que va a hacer es generar un ambiente de impunidad terrible y miedo".



FOTO JOEL DURÁN • HT3

José Palacios Obregón, abogado y director de "La Voz del Policía": "En los últimos cuatro años 280 policías han sido condenados por corrupción y otros 1,200 continúan bajo investigación. Sólo en lo que va de este año hay 320 efectivos procesados por corrupción de funcionarios".



FOTO JOEL DURÁN • HT3

Eli Vidal Córdova, abogado penalista: "La modificación no hace ninguna excepción. Prácticamente incluye cualquier delito que pudieran cometer los militares o policías".

el penalista Eli Vidal.

Según José Palacios Obregón, abogado y director de "La Voz del Policía", en los últimos cuatro años 280 policías han sido condenados por corrupción y otros 1,200 continúan bajo investigación. "Sólo en lo que va de este año hay 320 efectivos procesados por corrupción de funcionarios", asegura.

A este contingente se suma la detención de 993 policías durante el 2025 por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio, secuestro, robo y tráfico de drogas.

Vidal sostiene que el chuponeo o la vulneración de la intimidad de las personas también serán, por obra y

gracia de Rospigliosi & compañía, "delitos de función".

Para que no queden dudas de quién manda, la ley ordena que el Poder Judicial archive de forma "definitiva" los casos tramitados en la justicia ordinaria, incluso aquellos que ya cuentan con sentencia en primera instancia.

Con esta ley el reciente caso de Erick C., un adolescente de 17 años hallado muerto con signos de tortura y asfixia en una comisaría de Manchay, podrá derivar en que los efectivos involucrados soliciten ser juzgados en el fuero policial aduciendo que ejercían sus funciones durante la detención de la víctima.

La impunidad también sobrevuela expedientes como el

caso de "Los Oropeza", una presunta red liderada por el coronel Rafael Morón Díaz y otros seis agentes policiales investigados por el "cambiao" y la venta de lingotes de oro. El pasado 5 de mayo la Fiscalía consiguió que se dictara 15 meses de prisión preventiva contra Morón.

También está en peligro el expediente de "Los Arteros del Sur", una organización conformada por 14 policías, entre ellos el comandante Eugenio Vallejos Salazar. Según la Fiscalía, la banda extorsionaba a empresarios mediante falsos operativos policiales. Vallejos cumple actualmente una orden de prisión preventiva de 36 meses. De aprobarse la ley del

Congreso, el proceso volverá a fojas cero y Vallejos regresará a las calles.

Desde la Plaza Bolívar sostienen que el archivo de los casos que estén en el Poder Judicial, con y sin sentencia en primera instancia, será "inimpugnable, sin audiencia previa, y en un plazo no mayor a treinta días". La medida incluso elimina la reparación civil y los antecedentes judiciales y penales de los investigados.

"Es una barbaridad jurídica, es una aberración a todo concepto mínimo de derecho. Prácticamente es hacer una resolución por ley. Yo, como congresista, decido cuál va a ser el pronunciamiento del fondo de un caso. Es un error

supino", afirma el abogado Eli Vidal.

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), coincide con su colega y sostiene que la ley apunta, entre otras cosas, a limpiar a los policías y militares de los asesinatos y heridos durante las protestas sociales ocurridas desde el 2020 hasta la fecha. "La Fiscalía en estos casos ha imputado a los altos mandos policiales el delito de homicidio bajo la modalidad de 'comisión por omisión', es decir, los acusa de no haber ejercido sus funciones. Y lo que este dictamen precisamente subraya es que el delito de función también es una consecuencia de una omisión (...) En realidad lo que están buscando es aproximarse a la forma como funcionó la justicia en la década de los 90", afirma Rivera.

El abogado recuerda que, antes de la caída del régimen fujimorista, los crímenes de violaciones a los derechos humanos terminaban en el fuero militar. "Con excepción del caso de la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca, funcionó de esa forma durante dos décadas de una manera imperturbable", señala.

Uno de los expedientes sobre protestas sociales más avanzados acaba de ingresar este jueves a la etapa de control de acusación. Se trata del caso contra el general en retiro Víctor Zanabria, el coronel Frank Chang y otros nueve oficiales y subalternos de la Policía acusados por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca durante una manifestación en Lima en enero de 2023. La Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión para los policías.

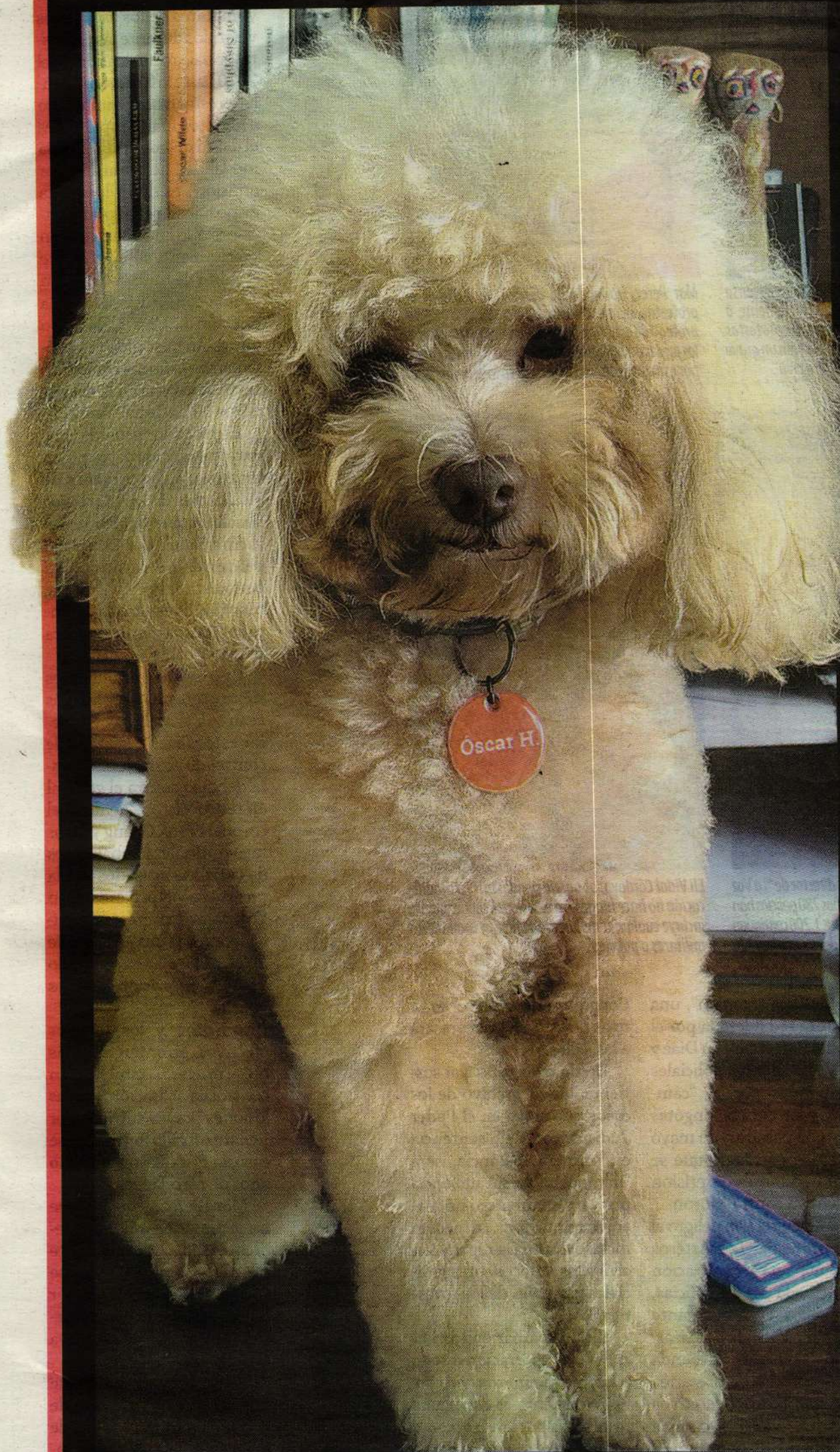
Zanabria y los mismos efectivos afrontan además otro proceso, también en control de acusación, por las lesiones graves sufridas por Renato Murillo Reyes. En ese caso, la Fiscalía solicita ocho años de cárcel efectiva.

Mar Pérez, abogada de las víctimas en ambos expedientes, advierte que existe un "riesgo inminente" de que todo el trabajo realizado por la Fiscalía quede desmantelado por efecto de la nueva norma.

"Hasta ahora, lo único que nos protege de este tipo de decisiones es la facultad de los jueces de aplicar el con-

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Tiempos de desafíos



Hemos luchado por lo que creemos y estamos orgullosos de los principios que hemos defendido y de las formas en que hemos ejercido nuestra función crítica e independiente. No tenemos nada de qué arrepentirnos. Sabemos ahora qué oleaje de revanchas, mezquindades y provocaciones nos espera. Aquí estaremos, más firmes que nunca.

Dispuestos a seguir enfrentándonos con quienes se acostumbraron a hacer del país un feudo personal, una subasta y un coto de caza.

No sabemos hacer otra cosa que hacer periodismo y lo seguiremos haciendo, con todas nuestras ganas y sin buscar ni halagos ni reconocimientos.

Lo que es cierto es que hoy, más que nunca, dependemos de quienes nos leen y quienes nos ven y escuchan. Esperamos seguir contando con ustedes en esta batalla por la persistencia. Resistir es un deber ante el desafío que le plantea al Perú una casta habituada a concentrar el poder y arrasar con quienes se ponen en su camino. Aquí estamos. Con ustedes y gracias a ustedes.



(CÓDIGO QR SÓLO PARA DONACIONES)

Apechugar

En estos días en que se va confirmando la victoria de Keiko —con un montón de irregularidades de las que solo sabremos la verdad completa en el futuro— he empezado a debatirme, como todos, entre la desolación y la esperanza. Supongo que les pasa a muchos. Esta es una de esas circunstancias en que uno tiene que ser muy claro en señalar la gravedad de que la jefa de una organización con prácticas delictivas —heredera de un gobierno probadamente criminal— termine de tomar lo que le faltaba de poder, algo que va a afectarnos inevitablemente de distintas maneras; y al mismo tiempo parece una obligación tener la cabeza fría y la lucidez intacta, no abandonarse.

Uno es apocalíptico en campaña. Pero cuando gana quien tememos, el trabajo es mirar juntos caminos posibles para capear el temporal, resistir y estar atento a cualquier vía existente para detener el avance del daño.

Por supuesto, no hablo de la aritmética fácil de los analistas bienpensantes. Me da una risa amarga que hablen de los números de senadores que “tiene” la oposición a Keiko Fujimori en el parlamento y que podrían “impedirle cosas”. Como si no conociéramos esta historia. Como si no hubiéramos visto cómo Alberto Fujimori solucionó el problemita cuando perdió la mayoría absoluta en el 2000. Si no lo recuerdan, vayan al video Kouri-Montesinos. Aquel video que provocó la caída del fujimorismo es también un testimonio de su poder, sus métodos, la forma en la que manejan el dinero negro.

Ese método es simple y está vigente para Keiko: se compra a unos congresistas y se extorsiona a otros, o se hace una combinación de ambas cosas. Fuerza Popular seguramente ya tiene mapeados a los senadores y diputados a los que se les puede crear (o reactivar) carpetas en la Fiscalía, que, dicho sea de paso, ellos controlan. El dilema a plantearles es simple: o colaboran o van a la cárcel. No hablo de una tradición montesinista súbitamente recuperada. Lo han hecho en estos años: los congresistas con antecedentes de “terrorismo” (la firma de un planillón de Movadef, la participación en una protesta) son los más vulnerables a estas amenazas.

Nada de lo que sirve de contrapeso en la democracia aplica cuando hablamos del fujimorismo. Ninguna garantía se puede dejar a la división de poderes, a instancias que supuestamente son salvaguardas contra decisiones arbitrarias. Cuando queda un organismo de control que puede ayudar, los fujimoristas van por su cabeza.

¿Qué queda entonces para la esperanza? ¿Qué luz al final del túnel?

Pues yo pensaría en una fuerza matriz que necesita cualquier tirano

para erigirse y hacerse indestructible, al menos al principio: la legitimidad. Alberto Fujimori fue legítimo luego de reelegirse en 1995 por más del 60% de los votos, con algunos logros que pudo atribuirse en un momento, como la captura de Abimael Guzmán y la consecuente desarticulación de la actividad subversiva. Su poder vino de un consenso nacional, en un momento histórico muy particular.

Keiko Fujimori ha sido elegida obteniendo la mitad de votos. Enfrenta



JUAN MANUEL ROBLES

continuación de la izquierda de Boric. Keiko no ganó en el territorio peruano y es la continuidad de un desastre.

¿Necesita legitimidad si tiene de su lado a las Fuerzas Armadas y la Policía, que gracias a su poder congresal tienen más blindaje que nunca para matar y masacrar? Yo creo que de todos modos la necesita, y que no la tenga es un mal cimientito para sus planes (o tentaciones).

Hay algo que a veces perdemos de vista. El intento de golpe de Castillo —que luego supimos justificado debido al complot para sacarlo, pero que entonces fue formalmente una ilegalidad— le dio legitimidad a la intransigencia de Boluarte. El resultado fue la conmoción y el desconcierto. El pacto mafioso podía aducir siempre que Boluarte era “la presidenta que pusieron los votantes de Castillo”, lavarse las manos selectivamente. Usarla para gobernar pero deslindar de ella cuando apareciera su faceta más impopular.

Con Keiko Fujimori las cosas se aclaran y sinceran: ella será la cabeza y la responsable de cualquier abuso, cualquier política torpe contra la economía popular, cualquier medida descarada a favor de grupos de poder. Ya no habrá desconcierto. Lo que habrá es una cabeza nítida que, naturalmente, provocará la unión que no podía existir en medio de la confusión.

Será un frente amplio natural, que no podrá darle el beneficio de la duda a Keiko porque no lo merece. Estarán allí políticos, activistas, periodistas, científicos sociales. Y jóvenes que descubrirán la pólvora de la memoria histórica, y que se enfrentarán al intento de borrarla de manera creativa y viral.

Ningún mandatario tiene carta libre de masacrar y matar solo porque posee el poder y las salvaguardas legales para hacerlo. Keiko, ganadora pírrica, no

está en condiciones de la represión que algunos de sus partidarios extremistas sueñan. Las cosas se revelarán más complicadas que la fábula de su papá y la “mano dura”. No hay que perder de vista que Keiko tiene congresistas que le son fieles pero que conforman una estructura parasitaria, que defenderá sus fueros y privilegios con uñas y dientes, y que llegado el caso también podrían darle la espalda: la vacancia no es la única forma de salir del poder en un país convulso.

No me malinterpreten. Keiko Fujimori tiene sed de venganza y está dispuesta a hacer cosas horribles. Y seguramente hará varias. Solo digo, después de pensarlo un poco, que la partida es más compleja de lo que ella pudo imaginar y que jugar a Reina de Corazones puede costarle su propia cabeza. ■



KEIKO NO GANÓ EN EL TERRITORIO PERUANO Y ES LA CONTINUIDAD DE UN DESASTRE

acusaciones de irregularidades en el proceso electoral, las cuales, a diferencia del fraudismo que ella puso en marcha en 2021, si son sólidas, inquietantes, implican inflado de actas con la complicidad de personeros, además de un escándalo con el voto en el extranjero que, con un cambio de última hora en el procedimiento (la no digitalización de las actas), perdió una posibilidad de cotejo: tenemos que confiar en lo que encontramos en valijas diplomáticas llegadas sospechosamente tarde. Esas acusaciones no se apagarán, quedarán allí, como quedará el resquemor y el resentimiento. Keiko no es su padre; ni siquiera se le puede comparar con referentes de la derecha regional de estos tiempos. Milei ganó con 55.69% con una clara preferencia popular frente al kirchnerismo gobernante; Kast ganó con un 58% contra la

La voluntad popular distorsionada



ISAAC BIGIO

Tenemos un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular.

En abril hubo 36 listas con un millar de candidatos. De ellas, solo una sexta parte ingresó al Congreso. Unos 9,18 millones de votos se repartieron entre los seis partidos que obtuvieron bancadas. Dos de cada tres ciudadanos no sufragaron por ninguna de estas agrupaciones. Para todos aquellos que votaron por las 30 listas que quedaron excluidas, es como si hubieran tirado su papeleta al tacho.

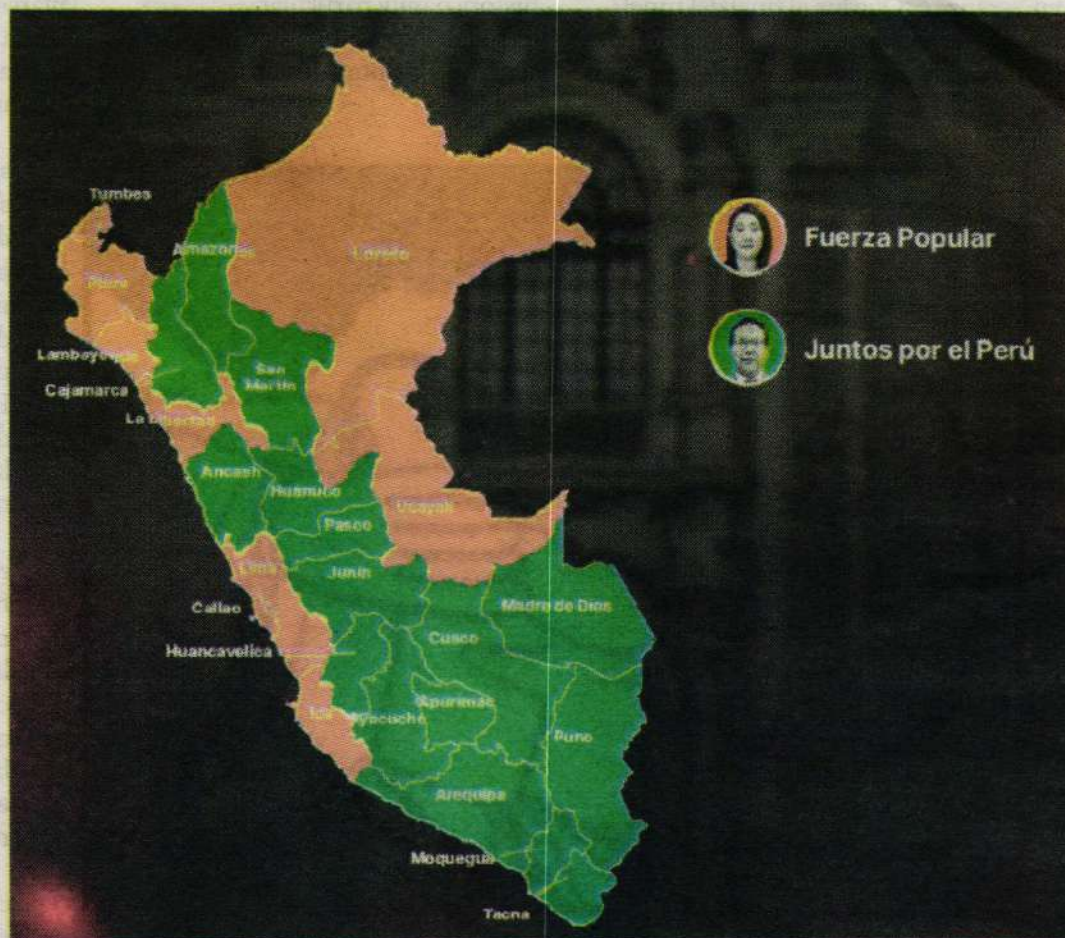
No conozco otro balotaje en el mundo en el cual, en la primera vuelta, el primer puesto haya obtenido el 14 % de los votos emitidos y el segundo menos del 10 %, por lo que, en la ronda final, más del 75 % de los votantes se vio obligado a votar no por su candidato favorito, sino contra la opción menos desfavorable. En las últimas cuatro elecciones presidenciales el Perú ha quedado polarizado entre fujimoristas y antifujimoristas.

En Argentina, para evitar tal proliferación de siglas, se realizan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que las organizaciones que no alcanzan un porcentaje mínimo quedan eliminadas y los distintos partidos pueden dirimir entre múltiples precandidatos. La izquierda, por ejemplo, suele terminar así con una sola lista. En el Perú ni siquiera hubo elecciones internas masivas como las que se realizan antes de las presidenciales en Estados Unidos o Colombia. Casi todas las candidaturas fueron designadas a dedo o en pequeños plenarios.

La atomización electoral fue incentivada por Keiko Fujimori para dividir, confundir y debilitar a sus rivales, pues ella siempre es respaldada por uno de cada ocho votantes. Keiko necesitaba reducir las opciones más cercanas al centro, como las de Alfonso López Chau, Jorge Nieto o Ricardo Belmont, quienes habrían tenido mayores posibilidades de impedir una polarización

favorable a su candidatura.

En Estados Unidos, Argentina o Brasil, cada senador representa a una determinada región. Si ese sistema se aplicara al Perú, Fuerza Popular solo habría ganado en ocho regiones, pero ha obtenido 22 de los 60 escaños senatoriales. Esto implica que controlará el 36,66% de la Cámara Alta, pese a



El mapa electoral es rotundo: Fujimori perdió en 16 de las 25 regiones.

JUNTOS POR EL PERÚ GANÓ EN 1,479 DISTRITOS, MIENTRAS QUE FUERZA POPULAR SOLO LO HIZO EN 411, MENOS DEL 22% DEL TOTAL

que en el distrito nacional apenas fue apoyada por aproximadamente uno de cada siete votantes y por uno de cada doce o trece electores habilitados.

Roberto Sánchez se quedó sin curul, al igual que otros candidatos que obtuvieron una votación importante, como Marisol Pérez Tello, con 139,339 votos. En cambio, resultaron elegidos tres nuevos diputados fujimoristas con alrededor de un millar de votos cada uno.

Juntos por el Perú ganó en 1,479 distritos, mientras que Fuerza Popular solo lo hizo en 411, menos del 22% del total. En los países con sistemas de representación uninominal, cada distrito elige a un parlamentario, quien además puede ser revocado por sus electores. En el Perú, en cambio, ello no ocurre y tampoco el mandatario puede convocar elecciones anticipadas.

Mientras que en el Reino Unido se realizan varios debates televisados entre candidatos, sin interrupciones comerciales ni comentarios que favorezcan a determinados participantes, en el Perú ocurre lo inverso. Según observadores de la Unión Europea, existe una marcada parcialidad en los grandes medios de comunicación.

En 2016 hubo un referendo británico sobre la UE. Pese a que este no era vinculante y a que ganó la opción de salir de la UE por menos de cuatro puntos, se acató dicho veredicto. En cambio, en el Perú, el Congreso profujimorista desoyó el mandato imperativo del referendo del 2018, en el que el 90,5% rechazó la bicameralidad. Asimismo, sin consultar al pueblo, el Congreso impuso una Constitución profundamente modificada y ha denegado ahora el principio del referendo.

Mientras en todas las democracias hay cierta independencia de poderes, en el Perú todos ellos se hallan controlados por el mismo partido que quiere detentar la Presidencia (y que querrá buscar la reelección).

Si en Colombia se conocieron los resultados finales a las pocas horas de la votación, en el Perú estos son tan lentos que generan muchas suspicacias. Como el fujimorismo ganó fraudulentamente en 2000, adujo fraudes cuando perdió elecciones y ha diseñado este sistema para que en las elecciones presidenciales siempre haya una polarización entre FP y el resto, es usual que amplios sectores nunca quieran reconocer los resultados. Hasta antes de esta segunda vuelta, Rafael López Aliaga insistía en nuevas elecciones y en que Keiko le había robado votos. Entre una y otra ronda electoral, de manera irregular, se cambió

al jefe de la ONPE y se impidió la digitalización de las actas del exterior.

En algunos pocos casos, las diásporas inclinan las elecciones en favor de algún candidato, pero, si no prosperan las tachas interpuestas por JP, esta sería la primera vez que lo hacen a favor de alguien que podría instaurar una dictadura.

Nunca antes ha habido una intromisión norteamericana tan alta en nuestras elecciones. Su embajador fue el único en participar en el debate presidencial y en reunirse con el JNE. Donald Trump apoya abiertamente que en Colombia y Brasil resulten elegidos sus favoritos, Abelardo de la Espriella y Flavio Bolsonaro, mientras que en Honduras, recientemente, pidió votar por los conservadores al mismo tiempo que excarcelaba al narcodictador Juan Orlando Hernández.

Como en los 90



RONALD GAMARRA

El fujimorismo acelera, desbocado, su carrera de regreso a la dictadura de los años noventa. No le basta haber tomado los principales órganos del Estado, ni proponerse ahora "barrer el Poder Judicial". También ha dado pasos decididos para vulnerar los derechos humanos que el Perú reconoció mediante tratados solemnes, desacatando decisiones de órganos del sistema interamericano que los protege. Ahora da un paso más en ese mismo sentido.

Se trata, esta vez, de una ley que impone la preeminencia del fuero militar policial sobre el Poder Judicial. Nada menos. El proyecto, aprobado esta semana en primera votación, dispone que los delitos cometidos por personal militar y policial sean vistos en esa jurisdicción especializada, incluso cuando ya exista un proceso abierto en la vía ordinaria. El pretexto es la presunta "especialización" de ese fuero, argumento que suena razonable hasta que se piensa un poco: es falaz, contrario al principio de igualdad ante la ley. Con ese criterio, cualquier rama profesional o sector social podría reclamar su propio tribunal, y retrocederíamos derecho al medioevo.

La experiencia histórica del país desmiente, una por una, esas buenas intenciones. El llamado "fuero privativo militar" nunca sirvió a la justicia ni a una aplicación más rigurosa de la ley sobre los miembros de la fuerza pública. Todo lo contrario: ha sido, desde siempre, un instrumento administrativo de las fuerzas armadas y policiales para proteger, por encima de cualquier otra cosa, los intereses corporativos del estamento militar. El espíritu de cuerpo —ese reflejo de cerrar filas antes que rendir cuentas— ha sido su rasgo más constante. Por eso el fuero militar ha sido siempre un escudo de impunidad. Quizá por eso también lo llamaron "privativo": un sistema que les pertenece solo a ellos, para que hagan con él lo que quieran.

Ese fue exactamente el sistema que el fujimorato consagró en los noventa, bajo el cogobierno de Fujimori y Montesinos, y que se mantuvo hasta su caída. Esa década sirvió para encubrir

los peores abusos contra los derechos humanos cometidos por elementos indignos del uniforme, que recibían sin embargo la "comprensión" de sus comandantes y del propio gobierno. El destacamento Colina, por ejemplo, tuvo desde el inicio la garantía de que estaría protegido de toda sanción. Y



Fernando Rospigliosi: apretando el paso legislativo para recrear el escenario en el que el fujimorismo podrá actuar a plenitud.

es que ese fuero nunca estuvo bajo la autoridad del Poder Judicial: pertenece al ámbito del gobierno, del Ministerio de Defensa y de los comandos militares.

En esos años, el régimen lo instrumentalizó para limpiar de responsabilidades a numerosos violadores de derechos humanos: el propio Colina, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el caso Cayara, o la masacre de Accomarca, donde 60 campesinos —entre ellos niños, mujeres y ancianos— fueron ejecutados y solo un subteniente recibió sanción: "abuso de autoridad", la peor burla posible a cualquier sentido mínimo de justicia. El caso La Cantuta, de hecho, no llegó al fuero militar por azar: una ley del Congreso fujimorista cambió a último momento el criterio con que la Corte Suprema dirimía las contiendas de competencia entre la justicia ordinaria y la militar, para asegurar que ese caso terminara donde el poder quería que acabara. Difícil imaginar un escenario peor para quien busca, con honestidad, que se haga justicia cuando militares o policías delinquen contra civiles.

No es, en el fondo, un fuero de san-

ción: es uno de protección y de impunidad, todo en nombre de un espíritu de cuerpo mal entendido y retorcido hasta la deformidad. A esa época, a ese espíritu, quiere devolvernos el Congreso actual, dominado por el fujimorismo, con la ley que acaba de aprobar. Quieren regresarnos a los tiempos en que Martha Chávez elucubraba sobre un delirante "poder judicial militar", como si fuera otro poder del Estado, paralelo y alternativo. Así lo llamaba ella, ocupando entonces el lugar que hoy llena Rospigliosi en el fujimorismo.

El monopolio del fuero militar sobre los delitos de su personal terminó con la caída de Fujimori y Montesinos. Se reconoció entonces al Poder Judicial como el poder válido para todos los ciudadanos, sin privilegios para ningún sector. Debía abolirse en ese momento la justicia castrense y crear tribunales disciplinarios reducidos a cuestiones menores y con decisiones apelables ante el Poder Judicial, pero la inconsecuencia y la timidez de la clase política no se atrevieron a tanto. Ese paso, el definitivo, nunca se dio. Y ahora el fujimorismo aprovecha la ocasión para devolver al fuero militar los privilegios y la fuerza que tuvo bajo la dictadura del primer Fujimori.

Es casi seguro que la ley será promulgada antes de que termine este período parlamentario. Nos corresponde denunciar esta nueva agresión al principio de igualdad y a los derechos humanos. Tampoco es una amenaza solo retórica o del pasado: la nueva definición de "delito de función"

calza con precisión en las imputaciones que la Fiscalía ya formuló contra jefes policiales y militares por las muertes registradas en las protestas de 2022 y 2023 en Andahuaylas, Juliaca, Pichanki, Cusco, Lima y Ayacucho. Si la ley se promulga, esos procesos podrían pasar a manos de la misma institución a la que pertenecen los investigados.

A esa lista se suma el caso de Colcabamba: una patrulla militar acribilló a balazos una camioneta donde viajaban, sin armas ni drogas, varios jóvenes que regresaban de jugar un partido de la Copa Perú. Murieron cinco. Un sobreviviente fue amenazado para que se autoinculpara. ¿Alguien ha visto que la institución militar sancione a los responsables, o que el país reciba siquiera una disculpa? Ese caso terminará también en un fuero que depende de la propia institución militar. ¿Alguien cree todavía que ahí habrá justicia?

Treinta años después, el país sigue girando sobre el mismo punto, como una aguja atascada en el surco, repitiendo la misma nota mientras espera, contra toda evidencia, que esta vez suene distinto. ■

EL LLAMADO "FUERO PRIVATIVO MILITAR" NUNCA SIRVIÓ A LA JUSTICIA NI A UNA APLICACIÓN MÁS RIGUROSA DE LA LEY



Sin miedo alguno

La señora prepara su gobierno. El gobierno que se parecerá al de su padre.

También nosotros deberíamos prepararnos.

Deberíamos preparar estrategias de toda índole para enfrentar la retroexcavadora que ya calienta motores.

Las ONG vinculadas a los derechos humanos deberían unir esfuerzos para preparar equipos de abogados que planteen, aquí y en el exterior, recursos y demandas. Es hora de olvidarse de siglas y nombres y acudir a la cita de la resistencia.

Las organizaciones sindicales debieran olvidarse de viejas divisiones de origen asiático y unirse alrededor de un menú de sobrevivencia. Se viene una tormenta perfecta y algunos siguen creyendo que cruzarán el océano en un caballito de totora.

El centro y el centro-izquierda tendrían que llegar a un acuerdo parlamentario y programático para hacerle frente a la señora que reivindica una dictadura podrida y que ha dicho que pretende imitarla. Espero que Jorge Nieto, por ejemplo, no les dé la razón a quienes piensan, malignedamente, que él votará esta vez por el oportunismo de derechas.

Es hora de que la cultura, la academia —no aludo aquí a los politólogos que en manada se están pasando al fujimorismo—, los artistas plásticos, la gente del cine y el teatro, hagan causa común frente a la marea de censuras y hostilidad que se nos viene. Los pronunciamientos, las denuncias y hasta los gritos serán necesarios.

Hay que juntar también al periodismo independiente que queda y hay que defender a quienes, desde las redes, ejercen su derecho a la insumisión. Hay que combatir desde cada trinchera a esa televisión que optó por el oficio de Rahab.

Los gobiernos regionales, las autoridades municipales y las organizaciones sociales del país que votó para no caer en manos de la mafia que intentará imponerse desde el 28 de julio deberán

buscar una agenda común de autodefensa. Se vienen leyes con nombre propio, causas penales planeadas en el local de Fuerza Popular, amenazas de portátiles. Habrá que darles cara y coraje a cada uno de esos embates.

Somos nueve millones, la mitad del país, los que no hemos querido que la hija de la dictadura y el oprobio sea “nuestra” presidenta. La diáspora, cuyos votos se han contado sospechosamente, ha decidido que ella regrese al Palacio donde su padre encerró a su madre y en el que hizo de primera dama traicionera.

El problema para la cabecilla de Fuerza Popular es que ya no habrá sorpresas. Su padre, el japonesito de la honradez, se sacó de la manga el rostro de jefe de Yakuza y cerró el Congreso para someter al país al neoliberalismo sin compasión de los Boloña y, a partir de eso, construir el edificio de la dictadura. Fujimori padre fue el Pearl Harbor del Perú: en muy poco tiempo, tras un intenso bombardeo, hizo del Perú un país brutal donde todo valía para sobrevivir y en el que la informalidad ya no era un accidente sino la naturaleza misma de la sociedad. De esa polvareda salieron César Acuña y la universidad como fábrica de cartones, la degradación del trabajo, la desaparición de derechos, el monopolio chileno de la aeronavegación. De esas ruinas institucionales emergió la satrapía en la que era posible que Montesinos acumulara 48 millones de dólares en cuentas en el extranjero y que la parentela del “patriarca” robara hasta las donaciones japonesas destinadas a los pobres.

Fujimori padre sorprendió al país bajándose del tractor y subiéndose al tanque de los militares corrompidos. La agenda de Fujimori

hija, en cambio, está cantada. Sabemos qué se propone, a qué métodos puede recurrir, de qué mañas es capaz, de cuántas hipocresías se valdrá modulando la voz como si se doblara a sí misma. Esta vez no habrá emboscadas. Por eso es imprescindible prepararse.

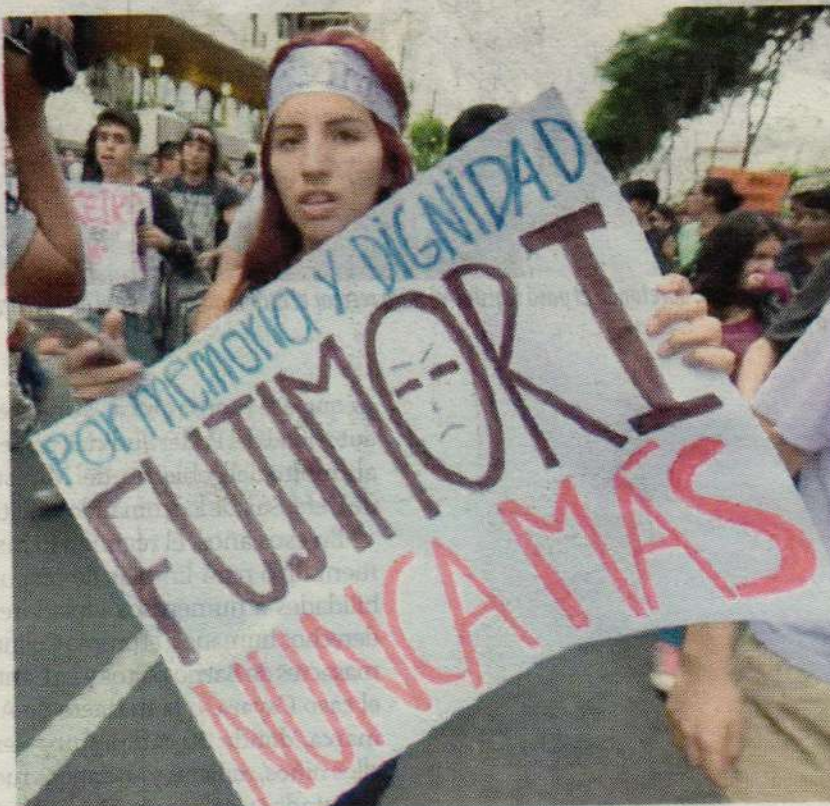
Lo importante es no dejarse amedrentar. Lo básico es no tenerles miedo. Lo decisivo será luchar, apelando inclusive a instancias internacionales. Cometida la indignidad de llevar a la presidencia a una hija que se enorgullece de las fechorías de su padre, no permitamos esta vez que el fujimorismo redoblado haga aguas menores sobre la oposición y las leyes que protegen el derecho a ejercerla.

No les temamos. Alguna breve autoridad tengo para hacer esta invocación: pasé tiempos difíciles cuando ellos

gobernaban, pero entendí muy pronto que nada es mejor que combatirlos.

Vigilemos. Impidamos otra década infame. Los que más temen, en realidad, son ellos: están a punto de gobernar el país que el patriarca convirtió en cultura combi y llegarán los tiempos en que la demagogia populista servirá de muy poco. La derecha que representan comprobará que más valía ser una expectativa, una víspera, una posibilidad que un gobierno al que le faltará capacidad de convocatoria y proyecto nacional.

Quizá sea bueno que la hija del dictador regrese al Palacio que su padre deshonoró. Quizá estemos a punto de inyectarnos la vacuna polivalente contra el fujimorismo.



Célebre imagen publicada como ilustración de una crónica de “The New York Times”.

EL PROBLEMA PARA LA CABECILLA DE FUERZA POPULAR ES QUE YA NO HABRÁ SORPRESAS

EL REGRESO DEL ORDEN



Agencia 26

Hacerse eco

Con el sentido de contribuir a la...
 Hacerse eco de un mensaje, noticia, rumor...
 la locución verbal contra el ruido...
 (algunos) eco de algo. El ruido...
 dor uso sus redes para hacerse eco de...
 las demandas de los vecinos. Los...
 ruidos eco de la campaña y...
 organizada por el comité de...
 ningún caso de contrabando...
 la empresa. (Algunos) eco de...
 algunos presidentes en...
 el pasado...
 los...
 los...
 los...
 los...

En "La Gente de Hitler: los rostros del Tercer Reich", el historiador Richard J. Evans toma a veintiún nazis de todo nivel y hace pequeñas biografías de estos: desde el círculo cercano a Adolf Hitler, como Heinrich Himmler y Hermann Göring, hasta el más lejano, como Leni Riefenstahl. En realidad, hace algo más. Los perfila. Encuentra patrones en sus comportamientos. Falencias. Traumas. Obsesiones. Dobleces. Posibles explicaciones.

Pero algo me llamó especialmente la atención más que el resto, y fue la visible incapacidad de varios jerarcas nazis (que Evans llama "los paladines"). Todos los estudios sobre la Alemania nazi muestran cómo su maquinaria no era tan eficiente como uno suele asumir, pero no había leído —en tan poco espacio— tal cantidad de testimonios que pintasen a estas "máquinas de matar" como unos perfectos idiotas.

El capítulo que más me sorprendió es el de Joachim von Ribbentrop, el canciller nazi que uno memoriza en los colegios como "el del pacto con Molotov". Evans retrata a von Ribbentrop desde mucho antes de ser canciller, y todos los testimonios lo pintan como un estúpido. Le decían mercachifle. Vendedor de champagne (que lo era). Arribista. Estúpido de nuevo. No sabía de política exterior, pero por su esmerada educación y su actividad comercial dominaba el inglés y el francés. Listo.

¿Tenía ideas propias von Ribbentrop? No. Siempre fue conservador, pero su modo de actuar se reducía a repetir lo que decía Hitler, o lo que él quería escuchar, y radicalizarlo. Mostrarse más leal y comprometido que todos. Más fúhrerista que el fúhrer. Sería un chupe y un sobón, si estas palabras existiesen en alemán.

Los chupes

En realidad, todos los líderes nazis eran sobones, y sus carreras profesionales habían estado marcadas por la mediocridad. Si uno lo piensa un poco, tiene mucho sentido: ¿de qué otro modo pudieron permanecer tantos años con vida al lado de alguien como Hitler? El partido nazi, además, había sido el refugio para las personas que sentían que les habían robado el

futuro, que su presente miserable no correspondía con el futuro que debió haberles tocado. No eran profesionales exitosos sino los que lamentaban su existencia mediocre. Eso se repite en casi todas las biografías de Evans.

Sin embargo, repito, los testimonios muestran a un von Ribbentrop particularmente estúpido, especialmente sobón. Era canciller en plena



CARLOS LEÓN MOYA

Recordaba este libro en estos días poselectorales. No es que quiera hacer un equivalente entre los nazis y Keiko Fujimori, para nada. Pero en todo gobierno autoritario hay algo que florece mucho más que el abuso: los sobones. Los que se voltean con la velocidad de la luz para ver si chapan algo en la nueva distribución de rentas. Los que bajan el tono sin que nadie se los pida, para ver si así les cae aliguito pronto.

Pienso en el periodismo. Muchas veces, la prensa no tiene que ser comprada o amedrentada por el gobierno autoritario de turno. Simplemente, no hace falta. Vienen incluidas con el paquete. Y los periodistas de estos medios, muchas veces, tampoco se hacen los difíciles. Habrá los que intentan mantener un espacio dentro de la miasma, pero la mayoría se adapta con una gran facilidad sin necesidad de que su editor le llame la atención. ¿Por qué? Porque existe la vocación de sobón y de chupe, y esa es más peligrosa, porque siempre va mucho más allá de lo que el jefe quiere. En su ánimo por complacer, radicaliza las cosas sin que nadie se lo pida.

Y también están esas otras personas —las mayores, las más renombradas— que sienten que su mediocre presente no corresponde a su trayectoria. Cómo así pasé de dirigir un diario a hacer un stream de Youtube que ven 200 viejitos, dicen en voz baja. Hasta que de pronto aparece una luz naranja en el futuro y ellos empiezan a cambiar de color: de celeste liberal a un naranja oxidado. No estoy muerto, se dicen, no me voy a jubilar. Nada de hacer streaming. Primero a la televisión, y desde el 28 de julio paso a otro medio, un medio de verdad. Como Hermann Göring, que después de dejar la Fuerza Aérea en 1918 y volverse adicto a la morfina, se convirtió en su comandante en jefe en 1935.

A veces, para los chupes, es cosa de saber arrimarse y esperar. ■



El periodista Augusto Álvarez Rodrich en el programa "Enfrentados", de América Televisión.

guerra mundial, pero no sabía lo que hacía. Radicalizaba a Hitler (¡a Hitler!) solo para caerle mejor, y eso le parecía muy peligroso a los nazis (¡a los nazis!). En otras palabras, no hay nada más peligroso que un sobón... hasta para los nazis.

Ah, la gente que se acomoda al poder.

Hacerse eco

Con el sentido de 'contribuir a la difusión de un mensaje, noticia o rumor', la locución verbal correcta es «hacerse (alguien) eco de algo»: «El influenciador usó sus redes para hacerse eco de las denuncias de los vecinos»; «Nos haremos eco de la campaña solidaria organizada por el comité de damas». En ningún caso debe considerarse válida la expresión «hacer (alguien) eco de algo», presente en oraciones del tipo «El periodista hizo eco de las quejas de los usuarios» o «Te pediría que hagas eco de nuestros reclamos en la próxima reunión del directorio».

Existe también la locución «hacer eco algo», pero posee un significado

distinto. De acuerdo con el «Diccionario de la lengua española» («DLE»), le corresponden las acepciones de 'tener proporción o correspondencia con otra cosa' y 'hacerse notable y digno de atención y reflexión (como si tuviera resonancia)'. Consignamos enseguida un ejemplo del uso de cada una: «El nuevo reglamento hace eco de principios ya recogidos en la legislación anterior»; «La propuesta del nuevo gerente hizo eco entre los trabajadores (los invitó a

pensar en ella)».

El Diccionario de la Academia recoge, asimismo, la locución «tener eco algo», que alude al hecho de 'propagarse (algo) con aceptación'. En apariencia, su significado es similar al de la segunda acepción de «hacer eco algo», pero cabría decir que, mientras esta última apunta más al impacto o resonancia emocional o racional, «tener eco» se refiere más bien a la difusión y acogida de algo entre un público, como se

aprecia en este ejemplo: «La campaña tuvo eco en la prensa».

Pasemos a otro asunto. Con ocasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en los medios se ha criticado el comportamiento de algunos entrenadores. El caso más saltante es el del técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, a quien el periodista argentino Eduardo Feinmann denostó sin miramientos por su extrema parquedad al hablar. Un diario de ese país resumió la diatriba: «Feinmann fulminó a Bielsa con una catarata de descalificaciones: "Vendehumo, fracasado y payasesco"» (corrienteshoy.com, 15/6/2026). Nos hacemos eco de la nota, pero le recomendamos al redactor escribir «vendehúmo», así, con tilde. ■



RICARDO VERA LEYVA

Se pudo hacer algo más



YBRAHIM LUNA

Muchos peruanos mantenemos una sensación de incomodidad luego de la segunda vuelta electoral que ha sellado la virtual y ajustada victoria de Keiko Fujimori y el inminente regreso de *'los 90'* como forma de gobierno. Y no es exactamente miedo –entendible, por cierto– por el futuro a mediano plazo, tampoco culpa. Es la sensación de bronca de que pudimos hacer algo más, un granito de arena extra, para impedir que la princesa de la dictadura tomara finalmente la batuta de su padre.

Nos dejamos llevar por la seguridad de que el antifujimorismo se activaría saludable y enérgico como cada cinco años y por la certeza de que la cuatro veces candidata no podría ganarle a nadie, ni siquiera a su risueño hermano ni a un pan confitado navideño.

Calculamos que si el candidato Roberto Sánchez (que no era santo de nuestra devoción) había logrado llegar al balotaje gracias a la bendición de Pedro Castillo, la votación de 2021 se replicaría y el voto rural revertiría los primeros cálculos hasta lograr la remontada por unos 40 mil votos.

Pero la realidad nos estalló en la cara.

Las estadísticas auguraban un escenario adverso. Un informe de IEP (Instituto de Estudios Peruanos) de marzo de este año ya mostraba un avance sostenido de la opción 'derecha' en la identificación ideológica. Si en marzo de 2021 el 26% de los encuestados se identificaba con algún espectro de la derecha, en marzo de 2026 lo hacía casi el doble: un 45%. Mientras que en marzo de 2021 si un 37% se identificaba con algún espectro de la izquierda, en marzo de 2026 solo lo hacía un 23%. El desbalance es el

reflejo de un fenómeno mundial que ya ha hecho carne en Latinoamérica.

A diferencia de 2021, cuando los grandes diarios y la televisión eran los que llevaban la batuta de las contracampañas, hoy existe un batallón de peruanos en redes sociales orgullosos de sus posturas extremas. Son los ultraderechistas libertarios defensores de la hipótesis de un fraude electoral contra Keiko Fujimori en 2021 y contra López Aliaga en la primera vuelta de 2026. Por otra parte, el giro a la derecha de varios países de la región ha reforzado la idea de que solo esta opción tendría la venia de EE.UU. para consolidar el avance económico, o, al menos, para no ser groseramente boicoteado.

También jugó en contra el corto tiempo que tuvo Juntos por el Perú para encarar la campaña de la segunda vuelta. De igual forma influyó su demora en deslindar de Antauro Hu-

mala y para consolidar una alianza con otras fuerzas políticas con un nuevo y mejor plan de gobierno. Tampoco hubo tiempo para realizar un segundo debate presidencial. El primero, según la mayoría de analistas, lo ganó Roberto Sánchez.

El voto en las regiones fue el previsto. Pero los porcentajes pudieron ser más contundentes. La sierra, el sur y el Perú rural votaron en contra de la candidata del sistema, pero la permanente campaña de terruqueo y la prédica sobre los peligros del "comunismo" tuvieron efectos en las urbes de provincias, donde la diferencia fue más ajustada. El mismo temor cundió en sectores de centro y centro derecha. Y muchos jóvenes decidieron su voto a última hora apostando por el rostro más familiar, y qué más familiar que Keiko en los últimos 15 años.

La bronca de muchos peruanos es la sensación de que se pudo hacer algo más. Ya no salimos a las calles como antes, en las masivas y nacionales marchas 'Keiko no va'. Asumimos que era un consenso el repudio a *'los 90'*. Calculamos que el desprestigio de la candidata de Fuerza Popular, que sostuvo a Dina Boluarte con sus 50 muertos, que dirigió el Congreso desde las sombras y dinamitó las instituciones democráticas, era suficiente para ser descartada como opción. No fue así. Toca aceptar los resultados. ■

Vasallos de un shogunato



ROBERTO RAMÍREZ MANCHEGO

La señora K y sus secuaces han ganado las elecciones. "Respeten el voto popular", es el conveniente eslogan de la prensa ataviada con kimono. "Así es la democracia", dicen, en tono abatido, quienes nunca se plegaron al fujimorato. "Vamos a fiscalizar", advierten las voces del centro.

Keikistas, antifujimoristas y nostálgicos de los noventa han llegado a un acuerdo. El consenso, en suma, es que el triunfo de la dama del caos ha sido democrático.

Incluso, cierto aire de desprendimiento, de elegancia republicana, se respira en la tienda de Juntos por el Perú, cuyos dirigentes objetan algunos detalles del resultado, sin la furia que mostraron sus contrincantes en

el pasado.

El recuerdo de Keiko Fujimori saboteando el triunfo de Pedro Castillo en 2021 y ninguneando a los compatriotas del sur sigue latente. Las procacidades de López Aliaga –en cuya personalidad conviven un cerdito de Walt Disney y un virtual sodomizador– contra los jefes de la ONPE y el JNE nos hicieron ver la locura y la hipocresía de esa horda del medioevo llamada Renovación Popular.

No es una fiesta democrática, pero es democracia y debemos respetarla, parecen decirnos los actores de la oposición. Pero eso no es cierto.

El triunfo de este segundo fujimorato es su negación misma. Creer que la democracia se reduce únicamente al sufragio es tomar la parte por el todo. Las elecciones, para nombrarse demo-

cráticas, deberían ser el resultado de diversos elementos que, tomados en su individualidad, irradian civismo y participación nacional.

Este sufragio llega precedido por reglas electorales distorsionadas, por organismos autónomos cooptados, por la captura de la JNJ, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Congreso, por la anuencia de una prensa monocorde, por la toma de la Fiscalía, por las leyes procrimen y por el desprecio a los resultados del referéndum. Este sufragio corona elementos autocráticos contruidos por el fujimorismo y sus aliados.

Los resultados de esta elección son antidemocráticos, no porque nazcan de un fraude electoral; lo son porque validan y legalizan una retahíla de asaltos contra la democracia.

En 1979, cuando se implantó el tan ansiado voto universal, se pensó en ciudadanos. En compatriotas que, a pesar de las diferencias económicas, sociales y culturales, eran iguales en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos.

Hoy eso ya no existe. El avance que se alcanzó en la Constitución de 1979 ha sido perversamente distorsionado. No somos una república de ciudadanos. Somos una república de electores. La clase política ha destruido el mandato nacional. Nos necesita para validarse y, una vez más, hemos caído en su trampa.

La señora K ha tenido varias máscaras desde que se convirtió en congresista y, posteriormente, en candidata presidencial. Esta vez ha ganado con la más infame de todas. Por eso, creer que vivimos en tiempos plurales y que el triunfo del fujimorato representa la voluntad democrática es un error de lógica.

Para regresar a la democracia debemos desmontar los mecanismos que la hacen inviable, comenzando por la concentración del poder y por todos los demás obstáculos que impiden la deliberación pacífica y pluralista. De no hacerlo, pasaremos de una república de electores a convertirnos en vasallos de un shogunato. ■

La muestra del sobresaliente Martín Chambi en el Centro Cultural Inca Garcilaso evidencia el contraste entre la precariedad andrajosa del gigante de Llusco con la pulcra sobriedad de los atuendos de los grupos populares, fotografiados hace ya cien años. Por aquel entonces, la proletarización y pauperización de los andes no habían alcanzado los lamentables niveles actuales.

El incremento de la desigualdad del último siglo es, en parte, resultado de las políticas estatales estructuradas para tutelar a los sectores populares, las mismas que han constreñido su progreso. Sospecho que el temor a la pérdida de competitividad que toda economía primario-exportadora experimenta ante el surgimiento de un mercado interno dinámico inspiró tal despropósito dirigista, compeliendo al emprendedor a renunciar a sus anhelos progresistas y a conformarse con la modesta remuneración del jornalero. Esa desigualdad inducida y acentuada con el tiempo incentiva la siguiente reflexión:

Si entendemos por capitalismo al sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la asignación de los recursos a través del mercado, y al socialismo como la colectivización de esos medios y la asignación centralmente

Depredacionismo



RAFAEL BELAUNDE AUBRY

planificada, ¿cómo denominar la mescolanza del engendro peruano?

Durante los siglos XIX y XX muchos países adoptaron el capitalismo y prosperaron; otros optaron por sistemas estatistas y colectivistas y fracasaron, pero ¿qué decir de aquellos híbridos como el nuestro que solo promueven la propiedad privada de algunos privilegiados, restringiéndosela al resto? ¿Cómo denominar la exacción y la manipulación falsificadora del mercado por parte del Estado? ¿Depredacionismo?

Veamos: los impuestos al consumo confiscan a la población precaria sus exiguos excedentes, impidiéndole ahorrar, lo que le imposibilita invertir y por tanto progresar. Los impuestos al consumo acentúan la indigencia de aquellos que a duras penas sobreviven, no condenan a quienes a pesar de esa carga acumulan excedentes suficientes como para mantenerse en azul y ahorrar e invertir.

Mediante el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo el Estado recauda más del 50% de los ingresos fiscales. Así, los precarios consumidores terminan aportando buena parte de las contribuciones fiscales que los empobrece y financiando los despilfarros de la administración pública.

La sesgada política tributaria no es la única herramienta del "depredacionismo".

La tramitología antojadiza es también un instrumento para segregar a millones de compatriotas condenándolos a la informalidad. Los informales legítimos, aquellos que no pueden soportar el costo del soborno que, salvo honrosas excepciones, acompaña a los procesos burocráticos de formalización, emprenden contra viento y marea. Es una afrenta equipararlos con los delincuentes con quienes los discriminadores pretenden hermanar.

La manipulación prebendaria de los recursos naturales es otra estratagema de depredacionismo, aunque mejor camuflado. El favoritismo predatorio se alcanzó mediante el incremento de la extensión mínima de la concesión minera, de una a cien hectáreas, y a través de un Derecho de Vigencia irrisorio. Así, los acaparadores pudieron expropiar para sí derechos sobre los recursos naturales del subsuelo con los que la naturaleza dotó a nuestro país y que son patrimonio de todos los peruanos. Ese depredacionismo neofeudal segrega a la minería artesanal y desnuda el desdén elitista por el bienestar colectivo.

Al confiscarle al trabajador parte del producto de su esfuerzo, al agobiarlo con extorsiones tramitológicas y al traficar con el patrimonio común de manera tramposa, el Estado evidencia estar al servicio de intereses inconfesables y ser autor y cómplice de los entuertos que entorpecen las posibilidades de los emergentes e imposibilitan el desarrollo del capitalismo verdadero.

Es, pues, en el Estado servil, no en el capitalismo, donde se origina la discriminación entre costa y sierra, entre criollo y mestizo, y son sus políticas pro oligárquicas y mercantilistas, manipuladoras del libre mercado, contrarias a la difusión de la propiedad y recelosas de la iniciativa emprendedora, las responsables de la aflicción popular y de la desigualdad inducida. ■

Estados Unidos e Irán han llegado a un preacuerdo o memorándum de entendimiento que prolonga el cese al fuego, periodo durante el cual se tratarán los asuntos más espinosos. El acuerdo definitivo se firmaría este viernes, y recién entonces sabríamos todos los detalles. De todos modos, algunos puntos del preacuerdo han trascendido ya.

El cese al fuego deberá durar 60 días, y durante ese tiempo se tratarán temas como el programa nuclear iraní y el descongelamiento de los activos iraníes en bancos occidentales y el alivio de las sanciones. Pero quizás lo más importante es el anuncio de que a partir de este viernes se abre completamente el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Según el país mediador, Paquistán, el alto al fuego abarca todos los frentes, incluyendo el Líbano, donde combaten las Fuerzas de Defensa de Israel con la milicia chiíta Hezbolá. Este frente es precisamente el que más problemas podría generar, descarrilando eventualmente todo el proceso tendiente a un acuerdo de paz definitivo.

La administración de Donald Trump ha vendido como una victoria el acuerdo, en particular la apertura del estrecho de Ormuz. Pero, en pri-

Derrota estratégica



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

mer lugar, habría que recordar que antes de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán, el estrecho estaba abierto a la libre navegación. Por lo tanto, su apertura ahora no puede considerarse un objetivo logrado de la guerra.

Por el contrario, ninguno de los objetivos planteados por Estados Unidos, como justificación para iniciar la guerra contra Irán, ha sido alcanzado. No ha logrado los objetivos maximalistas que se habían trazado y, peor aún, ni siquiera ha conseguido arrancar al régimen iraní concesiones relativamente menores.

En cuanto a los objetivos maximalistas, Estados Unidos no ha podido derribar al régimen de los ayatolás, algo que creyeron poder conseguir (en solo días) descabezando a la cúpula guber-

nante iraní. Tampoco consiguieron una rendición incondicional del régimen islamista, objetivo explícito del presidente norteamericano posteriormente.

En relación a concesiones relativamente menores, Estados Unidos no ha podido obligar a Irán a renunciar a su programa de misiles balísticos, ni al apoyo que brinda a sus aliados de la región, como Hezbolá en el Líbano y los hutíes de Yemen. Tampoco ha podido obligar a Irán a renunciar a su programa nuclear (el tema recién se discutirá en los próximos 60 días).

Incluso si Trump consiguiera un acuerdo nuclear en el que la teocracia iraní renunciara a fabricar bombas nucleares, esto tampoco sería una victoria real. Irán no estaba fabricando bombas nucleares y ya el acuerdo firmado con este país en 2015 por el expresidente

Barack Obama estipulaba precisamente aquello (sin embargo, Trump unilateralmente decidió retirar a su país del acuerdo).

En cualquier caso, el país que menos satisfecho ha quedado con el preacuerdo entre Irán y Estados Unidos es sin duda Israel. La sociedad y el *establishment* político, de derecha a izquierda (aunque la izquierda está reducida a su mínima expresión), han condenado el memorándum de entendimiento, culpando a Netanyahu por ello.

El domingo pasado, pocas horas antes de la firma virtual del preacuerdo, el gobierno de Netanyahu intentó sabotearlo atacando el sur de Beirut (capital del Líbano), pese a que Trump le había urgido a no hacerlo. Trump se puso furioso con Netanyahu, pero en paralelo convenció a Irán de que no retaliara el ataque para no perturbar la firma del acuerdo.

El éxito de un acuerdo de paz duradero dependerá ahora de sortear dos obstáculos. El primero: lograr que el pacto nuclear satisfaga a todas las partes. Y el segundo: que Netanyahu no logre sabotear el acuerdo en el frente libanés, puesto que lo intentará, dada la presión interna y la urgencia que tiene por sobrevivir en el cargo (se presenta a la reelección). ■

Fútbol americano

“Durante esta copa mundial, el verdadero presidente de la FIFA fue Mussolini”, comentó en 1934 Jules Rimet, presidente de la federación de fútbol entre 1921 y 1954, y fundador del campeonato mundial que ahora mismo está celebrando su vigésimo tercera edición. Esta vez el anfitrión no es la Italia fascista, sino las democracias de Estados Unidos, México y Canadá, pero tenemos a Donald Trump para recordarnos que el evento deportivo más popular del planeta puede ser secuestrado y reconfigurado como un instrumento de propaganda.

Al menos Mussolini, que aprovechó el torneo para glorificar el fascismo, podría haberse defendido diciendo que Italia amó el fútbol desde que este empezara a popularizarse hacia fines del siglo XIX. Los yanquis, en cambio, tienen su propio fútbol. Al practicado por el resto del planeta le llaman “soccer”, y nunca lo apreciaron mucho. Durante estos días de mundial, varios partidos de “soccer” se están jugando en los estadios originalmente contruidos para jugar a ese otro fútbol, deporte brutal en el que los jugadores deben llevar casco, protector bucal –como los boxeadores– y toda una armadura compuesta de materiales sintéticos.

Trump incluso hizo una comparación entre ambos fútboles al asegurar que el actual mundial “equivaldría a muchos Super Bowls”, como se conoce a la final anual de la versión yanqui, uno de los eventos más comerciales del planeta. Las marcas que desean anunciar durante la transmisión de ese partido pagan entre ocho y diez millones de dólares por espacios publicitarios de treinta segundos. Durante el medio tiempo, los fanáticos –cerveza en mano– son agasajados con conciertos de pop protagonizados por las estrellas más populares (y comerciales, valga la redundancia) del momento.

Como Mussolini hace casi un siglo, Trump tiene a la FIFA en el bolsillo. Gianni Infantino, su actual presidente, se ha pasado el último lustro franela en

mano, adulando al republicano hasta el extremo de fabricarle un galardón *ad hoc*, el “Premio de la Paz de la FIFA”. Fue un premio consuelo para Trump, que venía exigiendo sin éxito (y sin eso que los yanquis llaman *self-awareness*) el Nobel de la Paz. No contentos con ese gesto zalamero, los mandamases de la FIFA decidieron participar en

otra notoria farsa trumpista: la “Junta de la Paz” (organización que Trump montó para reemplazar a Naciones Unidas y regentar Gaza). La FIFA ha prometido construir un estadio sobre las ruinas del genocidio.

Hace unos días, un corresponsal deportivo de la BBC le preguntó a Infantino si no sentía vergüenza por haber



El matón internacional Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, auténtico corruptor del fútbol.

perdido el control de su torneo (como le ocurrió a Rimet), considerando que Trump viene pasando por alto, con esa facilidad para la trasgresión que lo caracteriza, todos los requerimientos diplomáticos indispensables para que un evento como el mundial de fútbol resulte viable. A varias delegaciones, a miles de fanáticos y hasta a algunos árbitros ya se les han negado visas debido a sus países de procedencia, dejando en ridículo cualquier noción de que la FIFA y su torneo representen valores como la inclusión o la fraternidad.

El 26 de junio, la federación le dedicará un partido a la comunidad LGBTQ+. Los jugadores de Irán y Egipto –¡vaya ironía!– tendrán que lucir pasadores arcoíris en sus chimpunes (o algo por el estilo). Pero ya sabemos que ese tipo de gestos, especialmente cuando provienen de instituciones decadentes como la FIFA, son solo relaciones públicas. La celebración de



DANIEL ESPINOSA

lo gay es una de las maneras como un sistema esencialmente conservador y elitista –el que gobierna Occidente– le dice al mundo: “¿ya ven qué liberales somos?”.

El asunto es que la FIFA jamás representó nada de eso. Mussolini está muy lejos de ser el único dictador al que se le permitió aprovechar el circo futbolero para la vanagloria de su régimen. Mucho más cerca en el tiempo y el espacio tenemos a la Argentina de Jorge Videla y el mundial de 1978, otra ocasión en la que una dictadura intentó ocultar sus crímenes con goles, nacionalismo y fiebre fanática.

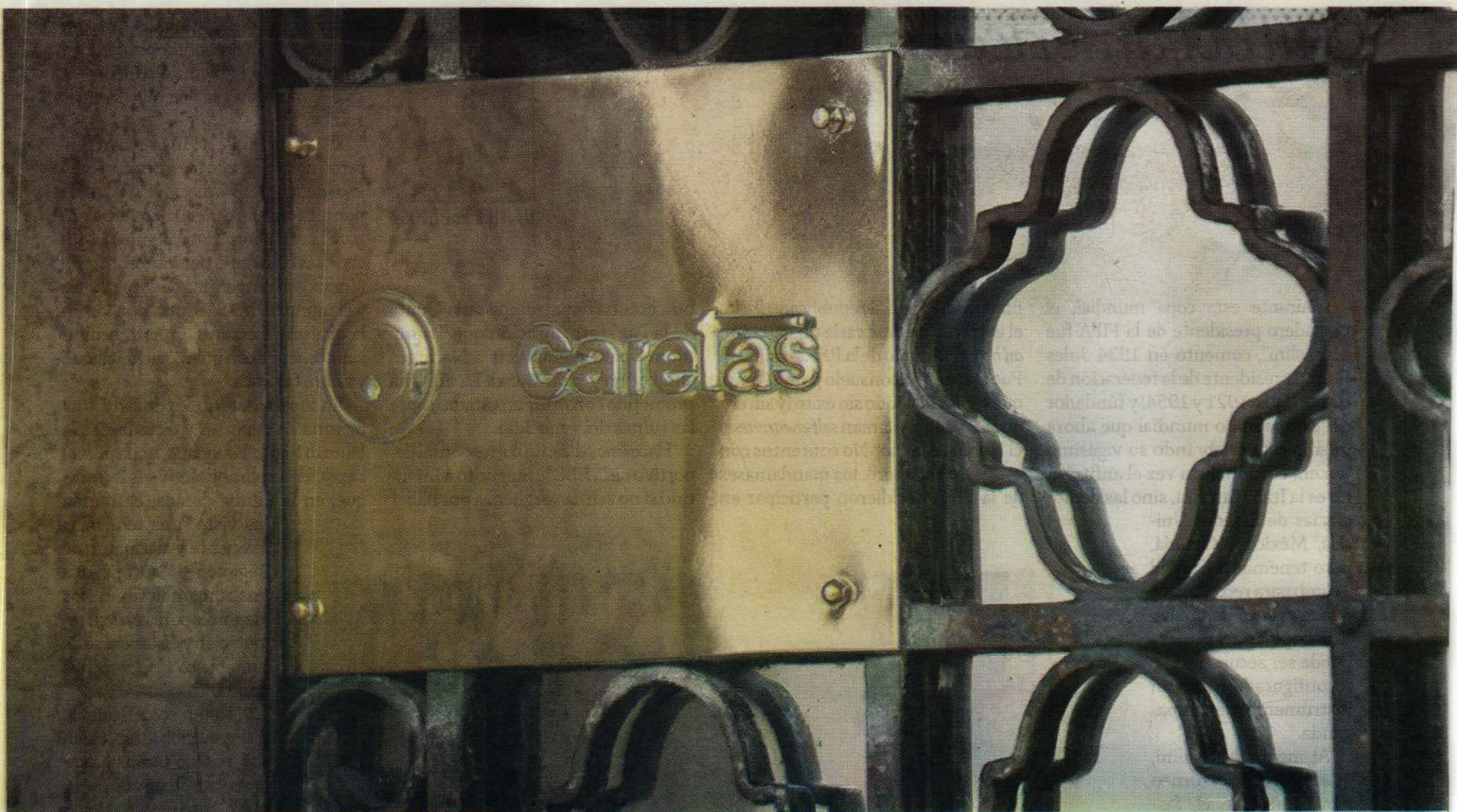
En su serie de artículos titulada “Una historia de deportes y dictadores”, la Human Rights Foundation da la primera patada explicándoles a sus lectores que, en la última década, el mundo ha visto “una tendencia creciente y alarmante de regímenes autoritarios instrumentalizando los deportes para lavar su reputación y distanciarse de sus abusos a los derechos humanos...”.

¿Cómo se defiende la FIFA cuando le recuerdan ese pasado turbio y este presente lleno de recaídas?, ¿o cuando alguien nota que ya transó con la satrapía saudí para que haga de sede en 2034? Su respuesta es tan conocida que aburre: la federación asegura ser “políticamente neutral”. Como no podría ser de otra manera debido a su prominencia, el mundo académico ya ha analizado a fondo la corrupción de la FIFA, así como esos discursillos de “neutralidad”. Según un reciente estudio de la Escuela de Derecho de la

Universidad de California:

“Para la FIFA, el problema no es que su neutralidad política haya legitimado a los malhechores, sino que esa neutralidad política no sea creíble. Esto se debe... a la merecida reputación de corrupción de la FIFA y a su incapacidad para hacer cumplir rigurosamente su propio código de ética. Dada la historia de la FIFA, especialmente en lo que respecta a los países anfitriones de la Copa... la corrupción es casi siempre el elefante en la habitación”.

Pero con Trump ya no hay más “elefantes en la habitación” (problemas evidentes que nadie quiere mencionar), pues el republicano, a diferencia de sus antecesores, prefiere la corrupción abierta, descarada e imposible de ignorar, como si al practicarla estuviera llevando a cabo una demostración de fuerza. Por eso pronosticamos que, para la FIFA y la Casa Blanca, este mundial será otro monumental autogol. ■



El portal de la histórica sede de "Caretas", ubicada en la Plaza de Armas. Ya nadie trabaja allí.

ALONSO ZAMBRANO

Hubo un tiempo en que "Caretas" era mucho más que una revista. Era una institución del periodismo. Bajo la dirección de Enrique Zileri, sus páginas se convirtieron en una parada obligada para entender cómo funcionaba el poder en el Perú. Presidentes, ministros, políticos, empresarios y líderes sociales de todas las posturas y corrientes sabían que un destape de la revista podía ponerlos contra las cuerdas.

Gustavo Gorriti, que se formó como periodista en esa sala de redacción, no tiene dudas sobre el lugar que ocupó "Caretas" en la historia del oficio. "Creo que fue una de las mejores revistas, si no la mejor, de América Latina en su tiempo", dice.

De aquella publicación que durante décadas marcó la agenda nacional queda una escombrera. Algunos de los reporteros y fotógrafos que se curtieron bajo el

De metal y melancolía

► "Caretas" fue un referente del periodismo peruano. Hoy es un fantasma que pena por allí

Publicación de enero de este año en la que se anuncia la venta del local histórico de "Caretas", en el Centro de Lima. El precio: 1,7 millones de dólares. La operación se suspendió porque el inmueble está considerado patrimonio cultural.



"Caretas" es la revista que fundó Doris Gibson y que continuó en la misma línea con Enrique Zileri. Vivió muchas dictaduras y miraba de frente a los autoritarismos. La revista actual es un zombi", dice Paola Ugaz, exredactora.

FOTO ARCHIVO H13



Portada groseramente fujimorista de la publicación días antes de la segunda vuelta.



El empresario Justo Carbajal Aguirre, dueño del operador logístico AFE. Alquiló la marca "Caretas" en el 2023 y fue contratado por la ONPE para el transporte de material electoral en la jornada del 7 de junio.



FOTO JOEL DURÁN • H13

"Para mí, la revista duró hasta que se fue Marco Zileri", dice Óscar Medrano, uno de los fotógrafos más recordados de "Caretas".

mando de Zileri lamentan que se haya convertido en un zombi.

"Hace un buen tiempo que no compro la revista", dice Marco Zileri, hijo de Enrique Zileri y director de "Caretas" hasta enero del 2019. "Es una revista mediocre que está tratando de conseguir clientes y de no pisar callos. Y se ha alejado del buen criterio", señala. Sobre el futuro de la

revista, añade: "Yo preferiría que deje de salir".

La crisis de "Caretas" comenzó con la muerte de Enrique Zileri el 2014. Siete años antes el patriarca había cedido la dirección de la revista a Marco, el primogénito de sus cinco vástagos. Pero en realidad Enrique no se jubiló hasta poco antes de fallecer. Y el reparto de la herencia resultó trágico para la publicación.

"Caretas" quedó accionarialmente dividida entre los cinco hijos, seccionados en dos bandos que hicieron imposible llegar a acuerdos mínimos en las decisiones importantes. Marco contaba con tres votos, el suyo y los de sus hermanas Diana y Drusila. Sebastián tenía dos, el suyo y el de Doménica.

"Caretas" mantenía entonces su centro de opera-

ciones en el histórico edificio de siete pisos frente a la Plaza de Armas. Allí llegaron a trabajar en su mejor momento más de 120 personas.

Si Enrique Zileri había logrado sortear los problemas financieros durante sus últimos años al frente de la revista, cuando sus hijos tomaron las riendas de la empresa las deudas empezaron a pasar factura en la sala de

redacción y en las oficinas administrativas. Periodistas y fotógrafos renunciaron. La mayoría se fue sin recibir los beneficios laborales que les correspondían.

Uno de esos casos fue el de Ruth Lozada, quien ingresó como secretaria de Enrique Zileri en 1981 y terminó convirtiéndose en redactora. Trabajó 25 años en la revista. Tras dejarla, demandó a la empresa porque no le pagaron una liquidación de 68,000 soles. En 2015 logró un embargo sobre la marca. "No tenían nada en 'Caretas'. Todo lo habían vendido o traspasado. Ya no había nada a nombre de la empresa, salvo la marca", dice Lozada.

Óscar Medrano, fotógrafo de "Caretas" durante 45 años, a quien la revista le debe más de S/ 100 mil, lo resume sin rodeos: "Hubo un mal manejo económico". Medrano tiene en su casa una oficina con decenas de sus fotografías enmarcadas sobre las paredes. Y nos enseña los reconocimientos nacionales e internacionales que ganó por su cobertura gráfica de lo ocurrido durante la época del terrorismo y el fujimorato.

"Para mí la revista es hasta Marco", dice el fotógrafo. Cuando le preguntamos por la situación actual de la publicación, dice escuetamente: "Interprete mi silencio".

Marco Zileri mantuvo la mayoría en el directorio hasta que su relación con Diana se resquebrajó. Hacia diciembre de 2018 ella decidió alinearse con Sebastián, quien tomó el control de la revista con el respaldo de sus dos hermanas.

Sebastián Zileri nombró director a Enrique Chávez, periodista que durante años había formado parte de la redacción. Bajo su gestión, la revista giró hacia la derecha y el oficialismo. Para 2019 la crisis financiera ya era tan severa que no había con qué pagarle a la imprenta Cimagraf.

Los hermanos vendieron la casa familiar en Las Casuarinas por 2,3 millones de dólares al propietario de la imprenta, Mario Paitán Porras.

"Lo primero que hicimos con la venta de la casa fue honrar la deuda con la imprenta (...). Esa fue una decisión que se tomó por parte

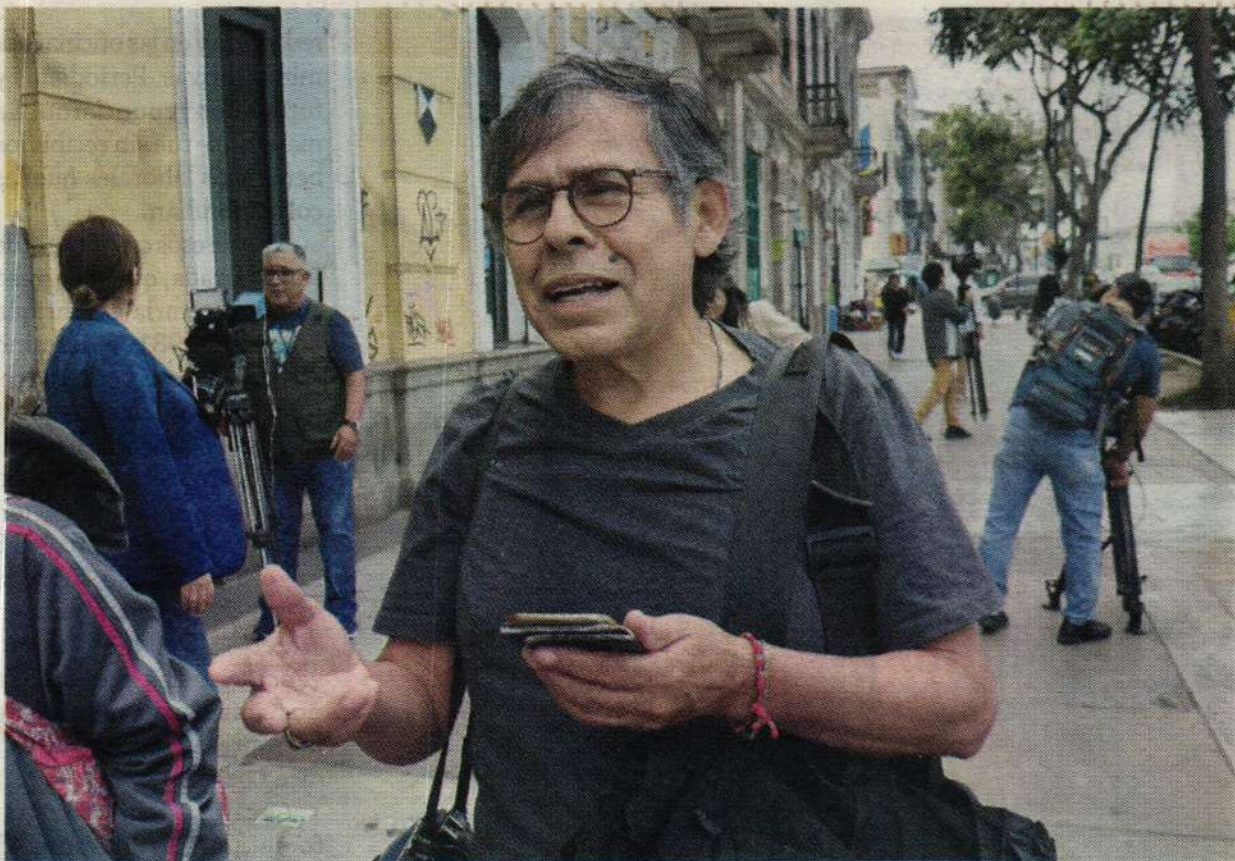


FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

"Carbajal no quiere a nadie que sea de la antigua redacción de 'Caretas'", dice Víctor Chacón Vargas, fotógrafo de la revista durante años y uno de los últimos despedidos por el nuevo dueño.

histórico edificio del centro de Lima y se trasladó a un inmueble cercano a las oficinas de AFE, en Surquillo.

Enrique Chávez siguió como director, ahora bajo el control de Carbajal, hasta inicios de 2026. En ese período "Caretas" se volvió una caja de resonancia del gobierno de Dina Boluarte y de su ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Los publinreportajes empezaron a tener peso propio dentro de la revista.

A inicios de 2026 Carbajal removió a Chávez de la dirección y sondeó a un grupo de periodistas jóvenes para el cargo, pero ninguno aceptó.

"Él quería colocar en el directorio a dos políticos que fueron parte de Perú Posible", dice un periodista al que Carbajal le ofreció el puesto y que no aceptó.

alquilar la marca", agrega Chacón.

"El humor de la revista, en este último período, se ha convertido en un meme. Y en realidad, en un mal meme", dice Marco Zileri.

Actualmente, "Caretas" está descabezada, se publica sin director. En el postón figura como editor general Rodrigo Chillitupa, que antes trabajó como redactor en Infobae y Latina.

En enero los hermanos Zileri pusieron a la venta el histórico local de "Caretas" ubicado en la Plaza de Armas. El precio es de 1.7 millones de dólares.

"Yo coleccionaba 'Caretas' desde que tenía 11 años, pero hace más de 10 años que dejé de comprar la revista", dice la periodista Paola Ugaz, exredactora de la revista.

"'Caretas' es la revista que



FOTO JOEL DURÁN • H13

"Para mí hay una 'Caretas' histórica que dejó de existir hace buen tiempo", dice el periodista Gustavo Gorriti.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

"Ya no había nada a nombre de la empresa, salvo la marca", dice Ruth Lozada, quien embargó el logo en el 2015 al no recibir el pago de sus beneficios sociales.

de todos los hermanos", dice Marco Zileri. Cuando le preguntamos por lo que originó la debacle de la revista, responde: "Yo no voy a entrar a un tema que en realidad es muy delicado, porque es de orden familiar. Es un tema muy sensible, precisamente porque se trata de un tema que está en vías de solución y que va a ir cayendo por su propio peso".

Con la llegada de la pandemia, "Caretas" dejó de circular varios meses. En febrero de 2020, poco antes de ese parón, la revista había publicado un reportaje fir-

mado por Carlos Cabanillas que acusaba al excongresista Ernesto Gamarra de integrar una organización criminal. El reportaje le costó a Cabanillas y a Enrique Chávez una condena por difamación agravada de dos años de cárcel suspendida y una reparación civil de 100,000 soles.

Acechados por las deudas, Sebastián y Diana Zileri buscaron un socio capitalista. Apareció en escena Justo Carbajal, empresario del sector transporte y propietario de la operadora logística AFE. Arrendó la marca en 2023 a

cambio de mantener a la familia en puestos clave.

Colocó a Sebastián como gerente, a Diana en el área de redes sociales y mantuvo a Chávez como director. El acuerdo no contó con la aprobación de Marco ni de Drusila Zileri.

"El camino que ha tomado la revista es un camino que yo no comparto", señala Marco Zileri. Luego, dice: "Carbajal es una persona que tiene otros intereses que no son los estrictamente periodísticos".

Con la llegada de Carbajal, la redacción abandonó el

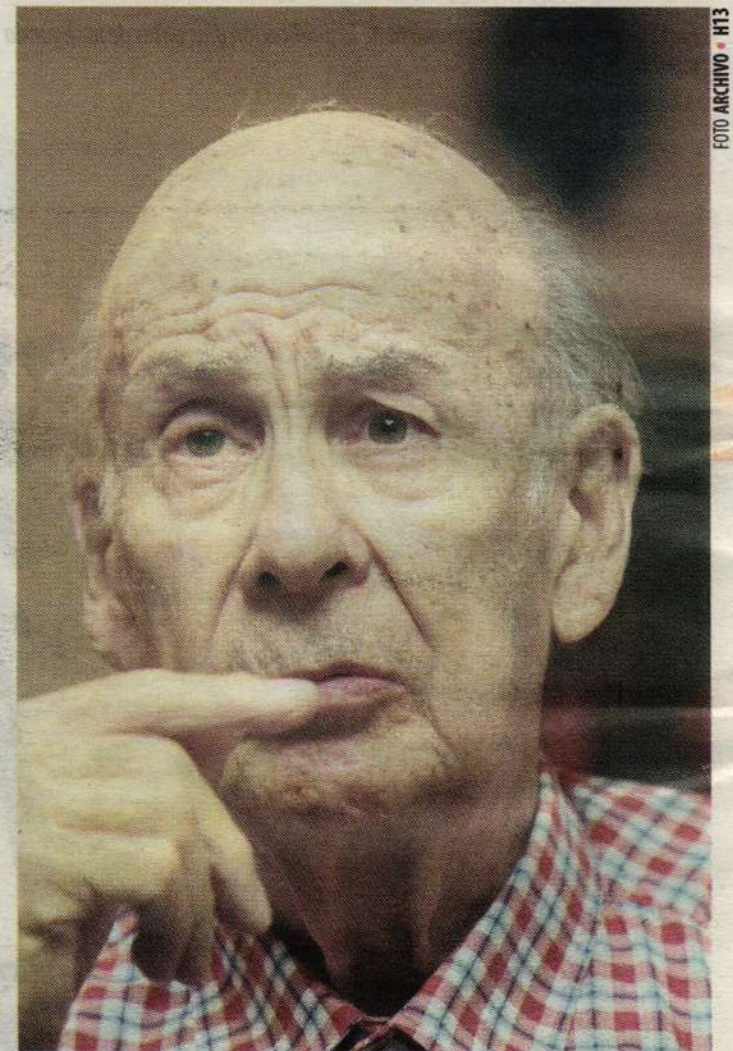


FOTO ARCHIVO • H13

Enrique Zileri Gibson, histórico director del semanario. La debacle de la revista comenzó tras su fallecimiento.

"Él no quiere a nadie que sea de la antigua redacción de 'Caretas'", dice Víctor Chacón Vargas, fotógrafo durante años de la revista y uno de los últimos despedidos por Carbajal.

"Si Enrique Zileri viera la revista hoy, saldría de su tumba y reventaría todo. El mismo Marco está muy dolido. Creo que no debieron

fundó Doris Gibson, que siguió la línea con Enrique Zileri, que vivió muchas dictaduras y miraba de frente a los autoritarismos. Esta revista es un zombi, no es 'Caretas'. Es otra cosa", agrega Ugaz.

"Para mí -dice Gustavo Gorriti- hay una 'Caretas' histórica que dejó de existir hace un tiempo. Eso es todo lo que tengo para decir".

HILDEBRANDT

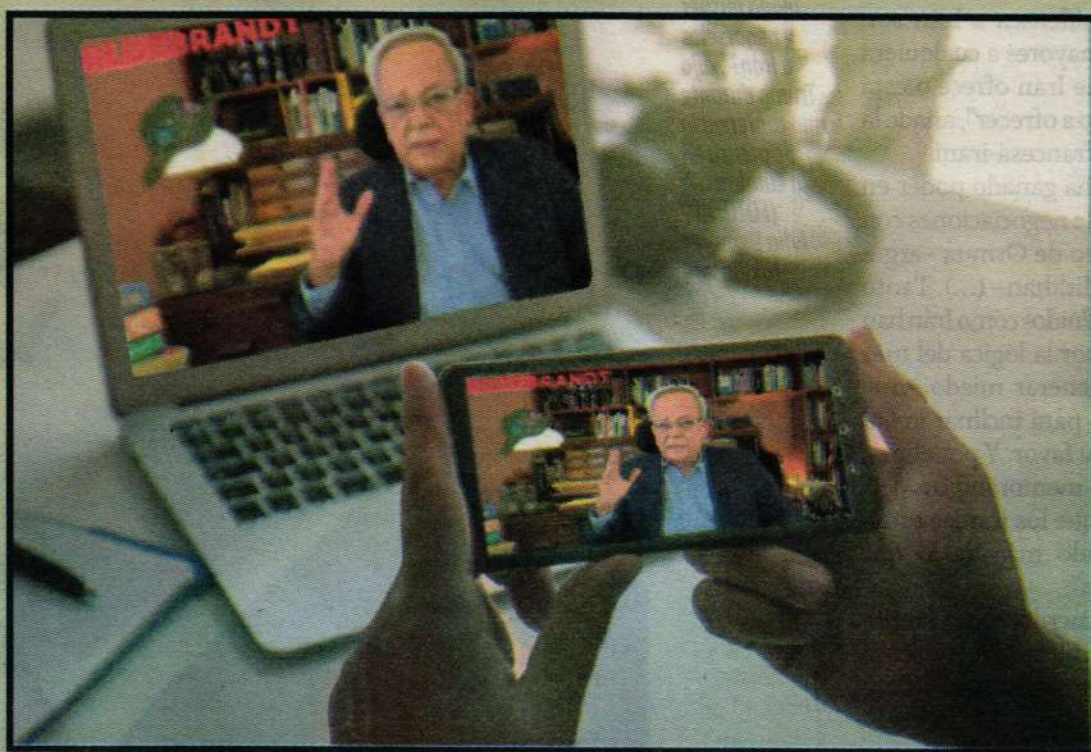
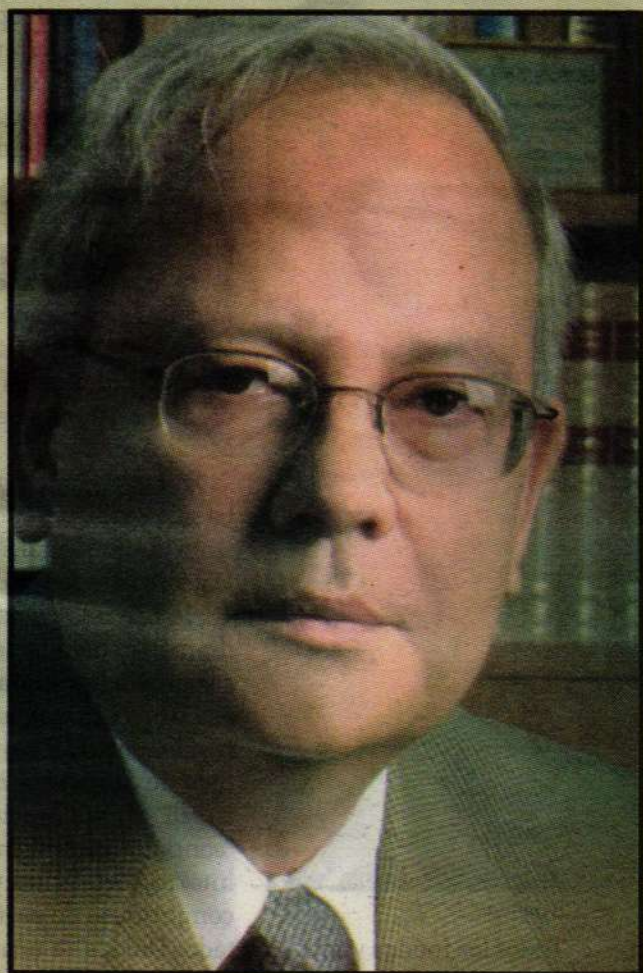
en sus trece

¡CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las **9 DE LA NOCHE**, siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube

@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube llegó esta semana a los

280,709 suscriptores y
ha sumado **50'562,120** vistas

La Gran Galería del Palacio de Versalles es, otra vez, escenario de una capitulación. El jueves 18 de junio, a las nueve y diez de la mañana, Donald Trump firmaba el "Memorándum de entendimiento" con Irán. Después de 110 días y 7,400 muertos, Trump no consiguió ninguno de los objetivos que se fijó a la hora de atacar a Irán. Mientras tanto, desde Israel ya han dicho que el "memorándum" es inaceptable.

"Tiene que quedar claro que no se ha firmado un pacto. Se trata de un memorándum que enfatiza y resume los temas que se abordarán en los próximos 60 días. Es decir, mucho está aún por verse", dice a este semanario Maneli Mirkhan, miembro de DORNA y del Observatorio Iraní, dos *think tank* que apuestan por "la transición democrática" de Irán.

"Lo que sí hay que señalar es que las concesiones estadounidenses a Irán son mucho mayores a cualquiera de las que Irán ofrece o está dispuesto a ofrecer", añade la analista francesa-iraní.

"Irán ha ganado poder en la mesa de negociaciones con el bloqueo de Ormuz -argumenta Mirkhan- (...). Tanto Estados Unidos como Irán han optado por la lógica del más fuerte: generar miedo en el enemigo para inclinar la balanza a su favor. Y por ahora, lo que el memorándum deja claro es que los iraníes están obteniendo más de lo que conceden".

El "acuerdo de entendimiento", filtrado a la prensa este miércoles desde la Casa Blanca, tiene 14 puntos. Arranca anunciando un cese al fuego y de hostilidades de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y sus respectivos aliados. El pacto incluye al Líbano, actualmente sometido al bombardeo y ocupación de Israel, principal aliado de Estados Unidos en la región.

Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar mutuamente la soberanía e integridad territorial del otro, estableciendo un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. El período sólo es prorrogable si las dos partes están de acuerdo.

Una vez firmado el documento, Estados Unidos se

"¿Qué voy a hacer? ¿Dejar que Arabia Saudita tenga misiles y negárselos a Irán?", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Cumbre G7. (FOTO: AP/Julia Demaree Nikhinson)

El estrecho de Trump

► El llamado "memorándum de entendimiento" firmado por Irán y los Estados Unidos es un traspié para Washington y una episódica "calamidad" para el ala más sanguinaria del gobierno israelí



compromete a levantar el bloqueo naval y "retirar sus fuerzas [militares] próximas a la República Islámica". Por su parte, Irán permitirá reinstaurar sin costo alguno el tráfico de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz durante dos meses. La administración futura del paso marítimo será concertada entre Irán y el Sultano de Omán.

Washington y sus socios en la región se comprome-

ten a resarcir a Irán con un monto mínimo de 300 millones de dólares. También poner fin a todo tipo de sanciones contra Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En esta suerte de capitulaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos garantiza exoneraciones tributarias al crudo iraní, a los derivados de petróleo y a los servicios asociados.

Todos los fondos y activos iraníes congelados o restringidos a lo largo de la última década -añade el memorándum- serán puestos a plena disposición de la República Islámica.

A cambio, Irán reafirmará su compromiso de no adquirir ni desarrollar armas nucleares. Sobre el uranio enriquecido que ya tiene, el régimen de los ayatolás se compromete a resolver ese asunto "mediante

un mecanismo previamente acordado". No hay mayores explicaciones al respecto.

Ni el régimen iraní ha sido derrocado ni el programa balístico destruido.

Sobre el fracaso, el presidente estadounidense ya se pronunció. Lo hizo a su estilo. "¿Qué voy a hacer? ¿Dejar que Arabia Saudita tenga misiles y negárselos a Irán?", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Cumbre G7.

"El acuerdo no hace más que registrar el fracaso absoluto de los Estados Unidos", señaló el jefe del equipo de negociaciones iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, a la agencia de noticias estatal *Fars*, este miércoles.

"Nada ha cambiado sustancialmente. Es verdad que Irán se enfrenta a una presión económica muy importante y temen insurrecciones internas, pero no han perdido la guerra. Y para ellos, por ahora, eso es victoria suficiente", dice Mirkhan, experta en Irán.

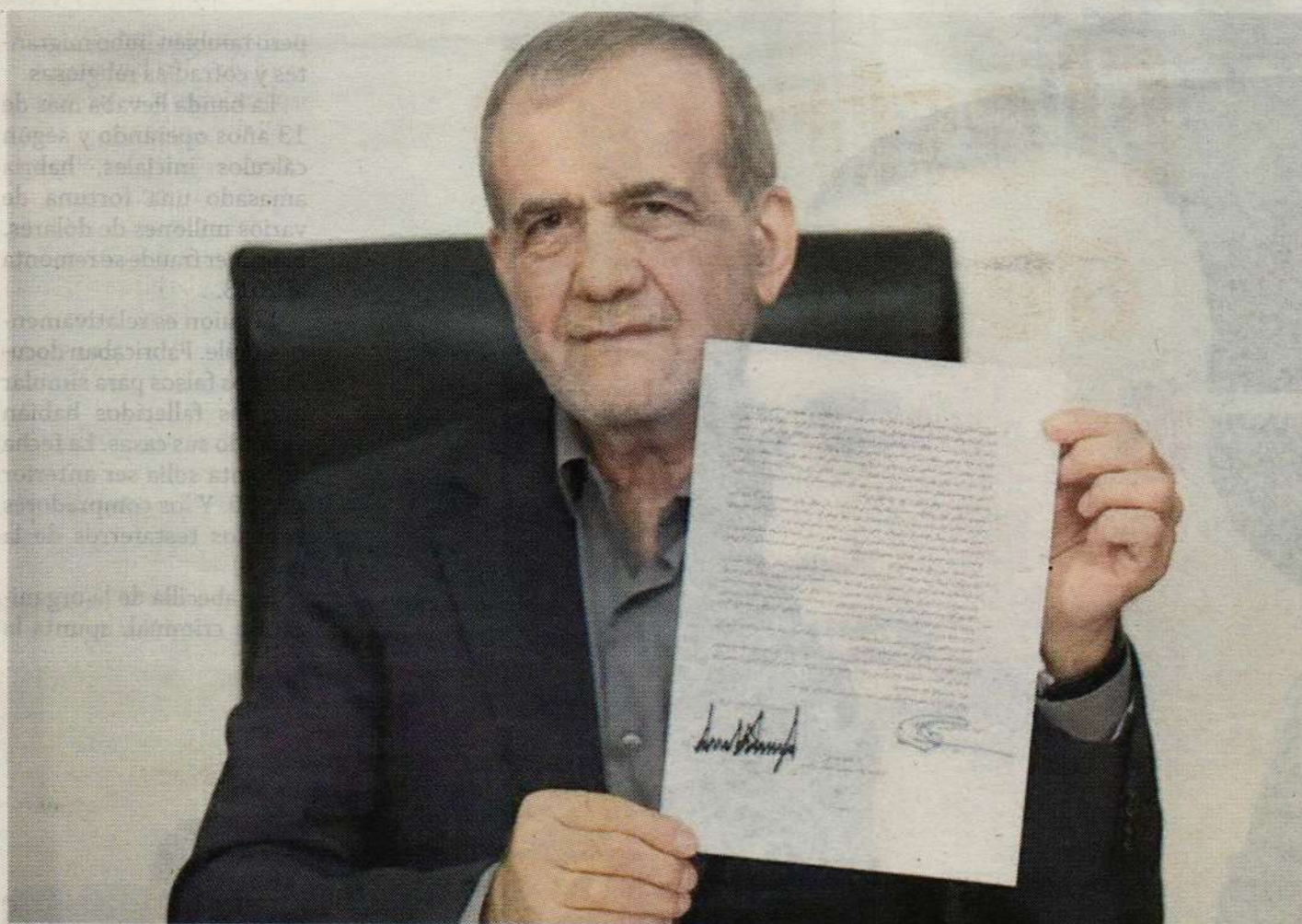
"En Estados Unidos, esta victoria les pertenece a los activistas que se opusieron a la guerra. Le pertenece a la población en general. En Irán, la victoria le pertenece al pueblo y a su firme determinación por resistir la agresión asesina de Israel, un país consumido por una ideología genocida", escribió este miércoles Hamid Dabashi, académico de la Universidad de Columbia, en una columna para el medio británico independiente *Middle East Eye*.

En Israel, el memorándum ha sido recibido como una derrota monumental. Alon Ben David, corresponsal del Canal 13, lo resumió como "un día dramático para Israel y para sus próximas generaciones".

Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional israelí, afirmó que la guerra "concluirá con el régimen iraní intacto, fortalecido, y con un compromiso de parte de Estados Unidos". Y un reportaje del diario económico *Calcalist*, publicado este martes, concluye que la campaña fue un "fracaso" y le costó a Israel 50 billones de *shekels* (17 billones de dólares).

"El asunto de Irán se perfila como el segundo peor fiasco en la larga trayectoria de Netanyahu", resume Amos Harel, analista de asuntos militares de la publicación *Haaretz*.

"Las grandiosas hazañas de



El jueves 18 de junio, a las nueve y diez de la mañana, Donald Trump firmó el "Memorandum de entendimiento" con Irán. Pocos minutos después, su contraparte, el presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, añadió su firma al documento. (FOTO: IRIB vía AFP)



Casi una quinta parte del Líbano está a merced de las tropas de ocupación israelí. Más de 1,2 millones de personas se han convertido en refugiados dentro de su propia patria y casi 3,700 han muerto. "Las cifras por sí solas no pueden reflejar la magnitud de la crisis. Más allá de los fallecidos y los heridos, toda una generación de niños ha visto su infancia truncada. Su sensación de seguridad —algo que todo niño necesita para crecer y desarrollarse— sigue profundamente mermada", denunció la UNICEF este 17 de junio. (FOTO: UNICEF/Choufany)

nuestros pilotos en los cielos de Irán y el heroísmo de nuestras tropas en el Líbano han sido borrados. Y todo esto, mientras Netanyahu nos demuestra qué tan aislado, débil, enfermo e ineficiente es", declaró este lunes Yair Golan, líder del Partido Democrático y rival electoral.

"(...) Debemos continuar con la demolición de hogares en el sur del Líbano, debemos continuar desplazando a sus habitantes, debemos

continuar eliminando a los terroristas de Hezbolá en el territorio", dijo este martes el ministro de defensa (acusado de crímenes de guerra y genocidio) Itamar Ben Gvir.

Netanyahu entiende que su destino político depende del fracaso (o éxito) del tratado. Este domingo bombardeó Beirut una hora antes de que Estados Unidos e Irán llegasen a un acuerdo sobre el contenido del memorándum.

"¿Por qué carajo Bibi lan-

zó ese maldito ataque?", dijo Trump al medio estadounidense Axios. "Me cabré mucho y se lo hice saber. No tiene puto criterio (...). Lo trastocó todo. Retrasó el acuerdo", añadió.

"O bien [Estados Unidos] carece de la voluntad para hacer cumplir sus compromisos, o carece de la capacidad para hacerlo", declaró Mohammad Ghalibaf, líder del equipo iraní de negociaciones.

Al cierre de esta edición, Is-

rael continúa con su campaña en el Líbano. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras han calificado la agresión israelí contra los libaneses de limpieza étnica y crimen de guerra.

"Las verdaderas preguntas son: ¿qué pasará con Líbano cuando Trump deje de prestarnos atención? ¿Hasta qué punto le interesa a Trump intervenir y decirle a Netanyahu que pare?", nos dice el periodista libanés Justin Salhani.

"Trump, al final, tiene muy buena relación con Israel. Gracias a ellos hace mucho dinero. Sus acuerdos comerciales son muy exitosos y, aún por encima, no tiene ni la capacidad de atención ni interés ni el compromiso para centrarse en la cuestión libanesa por mucho tiempo. Es decir, lo que tenemos por delante es un periodo de incertidumbre", argumenta el periodista.

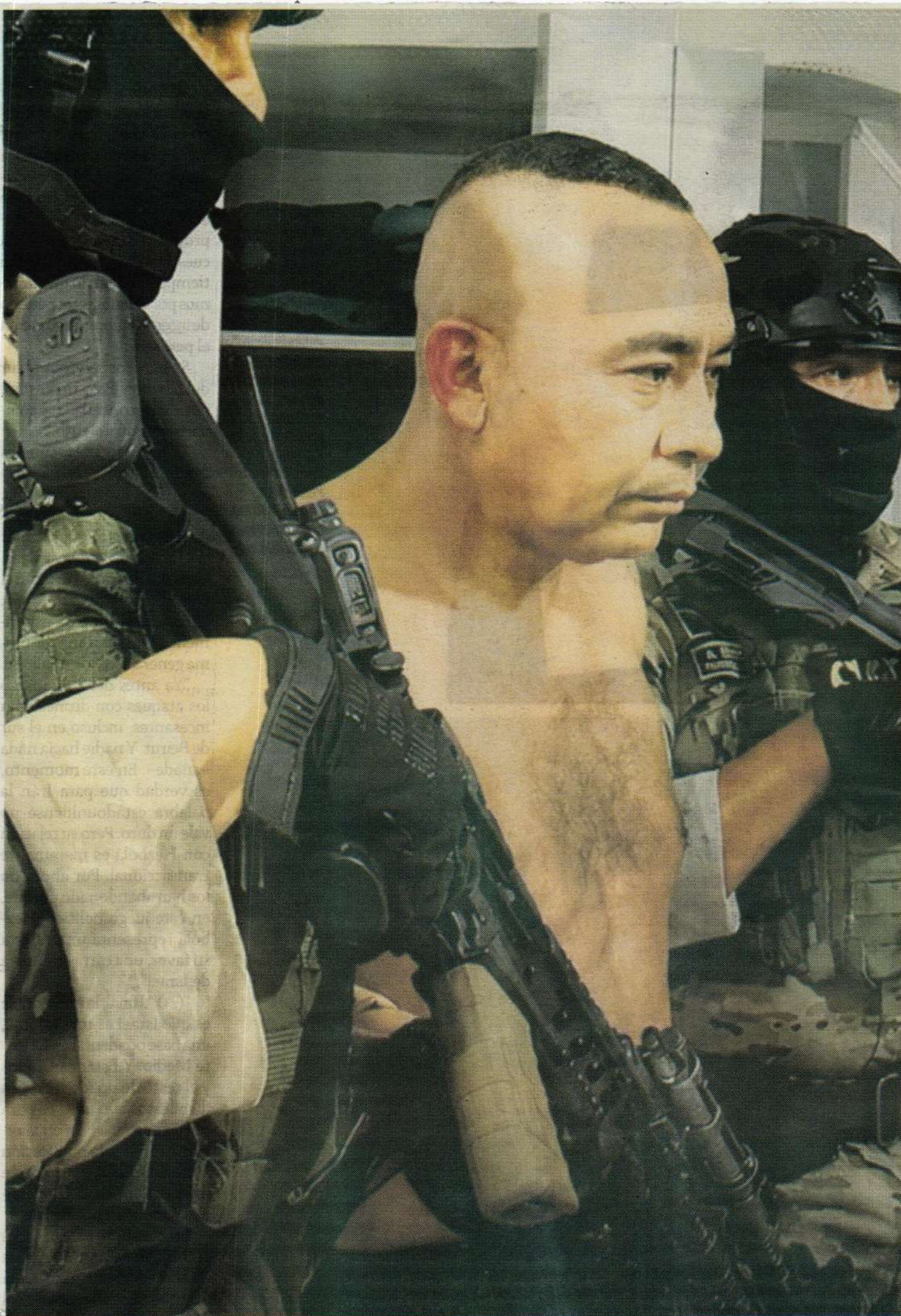
Salhani sostiene que el sur del Líbano y Palestina están, por ahora, condenados a compartir su sufrimiento.

"Nuestros pueblos sureños fronterizos con Israel han desaparecido. Es una tragedia. Simplemente los han borrado. Los han gazificado. El sur del Líbano es la nueva Gaza. Cada par de años, 'cortarán el césped'. Es el nuevo statu quo. Utilizarán el sur para experimentar con sus armas de última generación", dice Salhani.

"Ya antes del 2 de marzo los ataques con drones eran incesantes, incluso en el sur de Beirut. Y nadie hacía nada —añade—. En este momento, es verdad que para Irán la palabra estadounidense no vale un duro. Pero su relación con Hezbolá es meramente transaccional. Por ahora no los han abandonado porque, en este juego político, Hezbolá representa una carta a su favor, una carta en contra de Israel".

"(...) Al final, lo indiscutible es que Israel es una colonia, una base occidental en Oriente Medio. Y Estados Unidos y el resto de occidente están dispuestos a lo que sea para proteger su bastión en la región", dice a esta publicación Hussein Chokr, politólogo e investigador de la Universidad Americana de Beirut.

La cuestión palestina es el corazón del conflicto, dice Chokr, exinvestigador en la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental. "Todo gira en torno a Palestina. Estructural y geopolíticamente, la existencia colectiva de la región está supeditada a Palestina. Lo que le ocurre al pueblo palestino, nos ocurrirá a nosotros. Lo que nosotros hagamos, afectará al pueblo palestino", explica el analista libanés. "Pero hay que sincerarnos —añade—: la mayoría de nuestros regímenes son regímenes poscoloniales. No reflejan las voces o intereses del pueblo". ■



Luis Alberto Pérez Delgado, alias "Tío Luigi", presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la apropiación ilícita de inmuebles.

La muerte les sentaba bien

► Cayó la banda de alias Tío Luigi, especializada en robarse inmuebles pertenecientes a difuntos

SHANNA TACO

"Esa señora ha fallecido hace poquito, hazte una minuta del 2013 para poder entrar", se lee en uno de los chats de la banda que comandaba Luis Alberto Pérez Delgado. "Tío Luigi" tenía un negocio redondo: usurpaba el patrimonio inmobiliario de víctimas que no podían denunciarlo. Casi siempre fueron muertos,

pero también hubo migrantes y cofradías religiosas.

La banda llevaba más de 13 años operando y según cálculos iniciales, habría amasado una fortuna de varios millones de dólares. El primer fraude se remonta al 2013.

El guion es relativamente simple. Fabricaban documentos falsos para simular que los fallecidos habían vendido sus casas. La fecha de venta solía ser anterior a 1980. Y los compradores eran los testaferros de la red.

El cabecilla de la organización criminal, apunta la



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3

Orlando Sánchez, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (Divila): "Vamos a rastrear las cuentas para detectar dónde terminaron las ganancias millonarias", señaló a este semanario.

Fiscalía de Crimen Organizado, era Luis Pérez Delgado. El brazo legal sería el abogado Pedro Huambachano Huamán, encargado de falsificar minutas, poderes y suplantar identidades.

En el segundo nivel estaban los "operadores institucionales". En el Poder Judicial, José Polo Ramos, un exfuncionario "del Juzgado Civil Comercial de Lima", se encargaría de mover los hilos con ayuda de su mujer, también funcionaria del PJ, que ha sido identificada como "Rita". Según las pesquisas, el matrimonio se habría encargado de conseguir sentencias a favor de la banda.

En esa misma línea estaba Raúl Valdivia Hurtado, quien validaba las escrituras fraguadas en el Archivo General de la Nación. Completaba el



Pedro Huambachano Huamán, brazo legal de la organización. El abogado es investigado por falsificar minutas, contratos y poderes para simular la compraventa de predios.



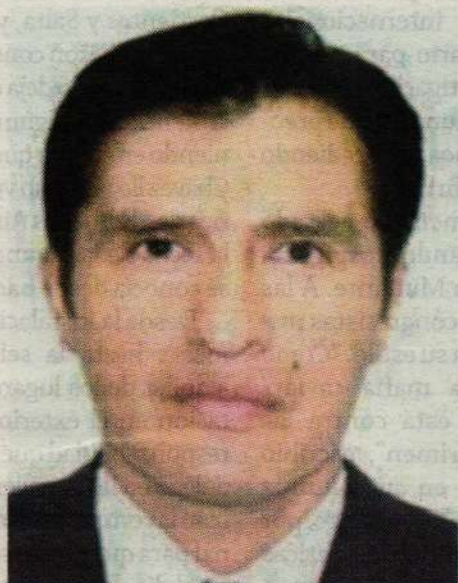
Carmen Martínez Galván, registradora de la Sunarp sometida a investigación. Habría sido una pieza clave.



Raúl Valdivia Hurtado, presunto brazo de la red criminal en el Archivo General de la Nación.



Daniel Castillo Díaz, señalado por las autoridades como la mano derecha del cabecilla de la red. Fue asesinado en octubre del 2024 por orden de Pérez Delgado, quien sospechaba que le estaba jugando sucio.



José Polo Ramos, presunto operador de la organización criminal en el Poder Judicial. Era el encargado de mover los hilos dentro del sistema de justicia para conseguir fallos favorables que validaran los despojos de la banda.



Estela Ríos Shuña, una de las testaferros. Ríos es una mujer de escasos recursos captada por la red para simular que su difunto esposo había comprado un predio.

reparto la registradora pública de la sede de Lima Carmen Martínez Galván.

El último eslabón de la red eran los testaferros, quienes figuraban como dueños de las propiedades.

La banda tenía como objetivo tres tipos de víctimas: muertos, migrantes y cofradías religiosas inactivas. Desde el 2013 usurparon quince inmuebles. Cinco de los predios que robaron eran de fallecidos, cinco pertenecían a personas que residen en el extranjero y cinco estaban a nombre de distintas cofradías.

Carmen Rosa Mera murió el 2005 soltera y sin hijos dejando una propiedad en Jesús María. La banda detectó el predio abandonado casi una década después.

En el 2016 Andrés Pérez Carballo, el padre de "Tío Luigi", falsificó un acta de matrimonio y se hizo pasar por el viudo de Rosa Ro-

dríguez, madre de Carmen Mera. Como tal, le correspondía la herencia. Todo parecía marchar bien para el falso viudo hasta que Sunarp observó el trámite y un juez anuló la herencia el 2022.

La banda activó entonces un plan de contingencia.

La testaferro Nancy Muñoz Machuca, cuñada de Luis Pérez, presentó una demanda ante el Poder Judicial alegando que le había comprado la casa a Carmen Mera dos años antes de que muriera. Esta vez la trafa funcionó.

"Esa señora ha fallecido hace poquito, hazte una minuta del 2013 para poder entrar", dice un mensaje de texto dirigido al abogado Pérez Huamanchao. La Fiscalía identificó al remitente como Daniel Castillo, según las pesquisas, mano derecha de "Tío Luigi" hasta que fue asesinado.

La banda se acababa de enterar de la muerte de

Elena Izu Izu, dueña de un inmueble en el jirón Jorge Chávez, en Breña. Sin familiares que reclamaran la casa, el predio acabó inscrito a nombre de Óscar Salinas, un testaferro que, echando mano de papeles fraguados, se hizo pasar por un comprador que había adquirido la propiedad varios años antes.

En las memorias de la banda una de sus mayores hazañas fue hacerse con el patrimonio inmobiliario de Jacobo Grosman Kleiberg, dueño de tres inmuebles en Barranco. Carmen Martínez, funcionaria de la Sunarp, fue decisiva tramitando la inscripción registral a favor del testaferro Francisco Collantes. Con el despojo formalizado, vendieron los tres predios haciéndose con un botín de 1'580,000 dólares.

Francisco Collantes era un testaferro de confianza. A su nombre figuraban otros dos inmuebles usurpados en

Santa Beatriz.

Tras su muerte en el 2020, sus hijos Saúl y Marco Collantes se presentaron como herederos legítimos de los bienes.

El segundo bolsón de víctimas de la banda fueron propietarios que residían fuera del país. Es el caso de tres ciudadanos chinos copropietarios de un inmueble en Jesús María.

La red fabricó un documento al que le pusieron una fecha del 2016, simulando que los dueños del predio le habían otorgado un poder absoluto a uno de los testaferros. Haciendo uso de ese poder, demolieron la edificación y, según las conversaciones obtenidas durante la investigación, planeaban levantar una torre multifamiliar de veinte pisos.

Conocedor de la alta demanda de las inmobiliarias, el "Tío Luigi" también puso en

la mira un terreno de 1,600 metros cuadrados en Chorrillos. Sus verdaderos dueños vivían en Estados Unidos.

Al mismo estilo de Rodolfo Orellana, inventaron que los propietarios tenían una deuda impaga a favor de su testaferro Carlos Guzmán y exigían la vivienda como penalidad. Jorge Enciso, un árbitro que según las pesquisas se prestó a la trama, remató la faena con un fallo a favor de los usurpadores.

Con los papeles truchos que daban al predio apariencia de "saneado", la mafia lo vendió en julio de 2024 a la empresa Lescapital por 950,000 soles.

Otras víctimas fueron las cofradías religiosas venidas a menos pero con patrimonio inmobiliario en su haber. Fundamentalmente a la banda le interesaban los locales comerciales del centro de Lima. Así, dieron con un inmueble en el jirón Andahuaylas propiedad de la Archicofradía de la Purísima Concepción. Para apoderarse del predio reclutaron a Estela Ríos Shuña, una mujer de escasos recursos que aceptó interpretar el papel de viuda que reclamaba la herencia de su difunto esposo.

Siguiendo el guion, el marido de Ríos había adquirido el local en 1978. Y ella lo reclamaba más de 40 años después. Tras conseguir un fallo judicial a favor, el predio terminó a nombre de la mujer en julio del 2021. De inmediato, la banda lo vendió por 1,8 millones de dólares. En el reparto del botín dejaron fuera a la viuda hechiza.

La Fiscalía descubrió mensajes de teléfono en los que Ríos suplicaba que le dieran mil soles para la fianza de su hijo detenido y un empleo como limpiadora.

Otra víctima fue la Cofradía de la Soledad. La mafia se hizo con uno de sus edificios en el jirón Cusco, en pleno Cercado de Lima. Para ello utilizó un contrato de compraventa fraguado.

La congregación más golpeada fue Nuestra Señora de la "O". La banda se apropió de tres de sus predios: uno en el jirón Andahuaylas, otro en el jirón Miró Quesada y una galería comercial en el jirón Paruro. Este botín

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

VIENE DE LA PÁGINA 9

obtuvo 15 mil votos más que en las elecciones del 2021, la campaña del cuco comunista tuvo acogida en varios medios locales. "Acá hubo periodistas que se dedicaron a instalar la narrativa de que si ganaba JP ya no vendrían más turistas", dice el abogado.

Amílcar Huamán, dirigente de la Federación Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC) del Cusco, denunció que el pánico financiero también llegó al campo. "Los fujimoristas vinieron a ofrecer hasta 2,000 soles por persona para que apoyen la campaña de Keiko. Tengo amigos y conozco dirigentes que aceptaron porque acá hay falta de trabajo y oportunidades. El mensaje que propagaron era que el comunismo nos iba a quitar las vacas y nuestras chacras. Eso no lo había visto en elecciones pasadas", dice Huamán.

Ruth Bárcena señala que en Ayacucho los dirigentes de Fuerza Popular llegaron a las comunidades más altas. Amílcar Huamán dice que los propios errores de la izquierda también le sumaron unos votos extras a la tienda anaranjada.

"Hubo mucha mezquindad entre los líderes. Mucho caudillismo y peleas por las candidaturas", acusa. Eso mismo dice la dirigente moqueguana Olga Mamani. "Nuestro peor error fue la falta de unidad. En mi región sólo hubo un comando de campaña en Ilo con Ahora Nación y Primero la Gente, pero eso no se replicó a otras provincias. Falta mucha formación política", señala.

En general, los dirigentes sociales coinciden en que no habrá luna de miel tras el 28 de julio. "Hoy viernes vamos a tener una movilización y el sábado vamos a reunirnos para plantear nuevas marchas y plantones. Luego haremos una convocatoria macro-regional para construir un frente", dice Lucio Ccallo.

La ayacuchana Ruth Bárcena cuenta que algunos dirigentes planean viajar a Lima para unirse a las marchas que se organizarán en la capital. "Da mucho miedo pensar en lo que pasará, pero la izquierda tiene que unirse en torno a un programa común. Vamos a tener que armar una resistencia", dice Fe-dra Rodríguez.

VIENE DE LA PÁGINA 11

trol difuso. Y precisamente por eso es que hay amenazas a su independencia. El juez Concepción Carhuancha, que estaba a cargo del control de acusación de uno de estos casos, hoy está suspendido y el proceso estancado", afirma Pérez.

Otro expediente que podría verse golpeado es el de la masacre de Colcabamba. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por la muerte de cinco jóvenes durante un falso operativo antidrogas.

Anthony Crespo, abogado de los familiares de las víctimas, asegura que acudirá a instancias internacionales si es necesario para preservar la investigación y buscar justicia. "Es una ley que preocupa, estamos retrocediendo 25 años", afirma.

El dictamen fue gestado entre Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante. A las críticas, los congresistas respondieron a su estilo. "Como siempre, la mafia caviar/comunista está contra las leyes anticrimen", escribió Rospigliosi en su columna de "Expreso". Muñante, por su parte, calificó las críticas al dictamen como "una campaña de mentiras impulsada por sectores del socialismo radical y la izquierda neomarxista".

Los medios de comunicación alineados con el oficialismo de facto se han limitado a replicar la nota de prensa del Parlamento con un encabezado que dice: "Congreso aprueba cadena perpetua para policías y militares que colaboren con bandas criminales".

"Es contradictorio porque pueden incrementar las penas de todos los delitos que quieran, pero lo cierto es que esos delitos siguen incluidos en su nueva definición del delito de función", afirma Eli Vidal.

"Este es el modo salvaje de legislar, ya no les interesa en lo más mínimo respetar ciertas formas de legalidad. El resultado es esta norma abiertamente inconstitucional", dice Carlos Rivera.

Fuentes congresales señalan que será la Comisión Permanente comandada por el fujimorismo la encargada de aprobar en segunda votación el texto. El objetivo es congraciarse con las fuerzas del orden haciéndole el trabajo sucio al próximo gobierno.

VIENE DE LA PÁGINA 5

que los de Chile o Estados Unidos.

Los 47,439 votos de Argentina —oficialmente 61% para Fujimori y 39% para Sánchez— aterrizaron en Lima el miércoles 10 a las 8 de la noche. Es decir, 76 horas después de que se hubieran cerrado las mesas electorales. Entre Buenos Aires y Lima hay solo cuatro horas y media de vuelo. Las actas fueron traídas por el cónsul Luis Isasi Ruiz Eldredge vía Aerolíneas Argentinas.

Desde Cancillería han argumentado que la demora se debió a que optaron por el envío de "carga consolidada" para las actas de 233 mesas instaladas en Buenos Aires, Corrientes y Salta, y que por eso no pudieron conseguir un vuelo antes. No deja de llamar la atención los argumentos teniendo en cuenta que al Jorge Chávez llegan ocho vuelos diarios desde Buenos Aires. Y que la fecha de la segunda vuelta se conocía desde hace meses.

Desde la instalación de las mesas hasta la selección y alquiler de los lugares de votación en el exterior fueron responsabilidad que la ONPE delegó en la Cancillería. También la contratación del personal para que preste seguridad en el día del *ballottage*.

"En Chile, lo normal era que el consulado alquile locales en el centro de Santiago para que los peruanos vayamos a votar. El 80% de la comunidad peruana vive cerca de la capital. En esta segunda vuelta no se alquilaron los cinco colegios de siempre, sino un local llamado Espacio Riesgo que está a las afueras de Santiago. Fue muy complicado llegar hasta allá porque no había Metro. A eso súmale que tuvimos que hacer cola por varias horas", anota Jorge Luis Prado Villafuerte, quien vive hace 18 años en Santiago.

En Salt Lake City, Utah (EE. UU.), donde votaron 1,727 peruanos, la Cancillería alquiló el exclusivo hotel Hilton Center para instalar las 13 mesas de votación. Allí Fujimori ganó a Sánchez por 69,4% contra 31,6%.

En esa ciudad un peruano grabó a un miembro de mesa que conminaba a los electores a votar por Keiko Fujimori. El denunciante fue retirado por el personal de seguridad del hotel. No fue la única queja en las redes sociales sobre el favorecimiento a la candidata fujimorista.

VIENE DE LA PÁGINA 29

se convirtió en su ruina. Siguiendo el rastro del despojo de la Virgen de la O, el fiscal de Crimen Organizado José Orihuela encontró la punta de la madeja.

Para tomar el predio del jirón Paruro de la cofradía la banda usó el nombre de un fallecido, Alfredo Bulege, al que pusieron como comprador. Su hija y única heredera estaba viva, pero, viviendo en el extranjero, no se enteraría. Fraguaron un documento en el que la heredera les daba todos los poderes para gestionar la inscripción del inmueble.

Con lo que no contaron es que aparecieran en escena los hijastros de Bulege, Julio e Hilda Pacheco Pimentel. Bulege estaba casado en segundas nupcias y su mujer, también fallecida, tenía herederos. Así que en Registros Públicos no permitieron la inscripción de la propiedad.

Para tratar de solucionar el entripado familiar en el que había caído la banda, el abogado Pedro Huambachano fabricó otro poder falso a nombre de los hermanos Pacheco que hasta entonces no estaban enterados de nada. En ese poder otorgaban facultades a Huambachano.

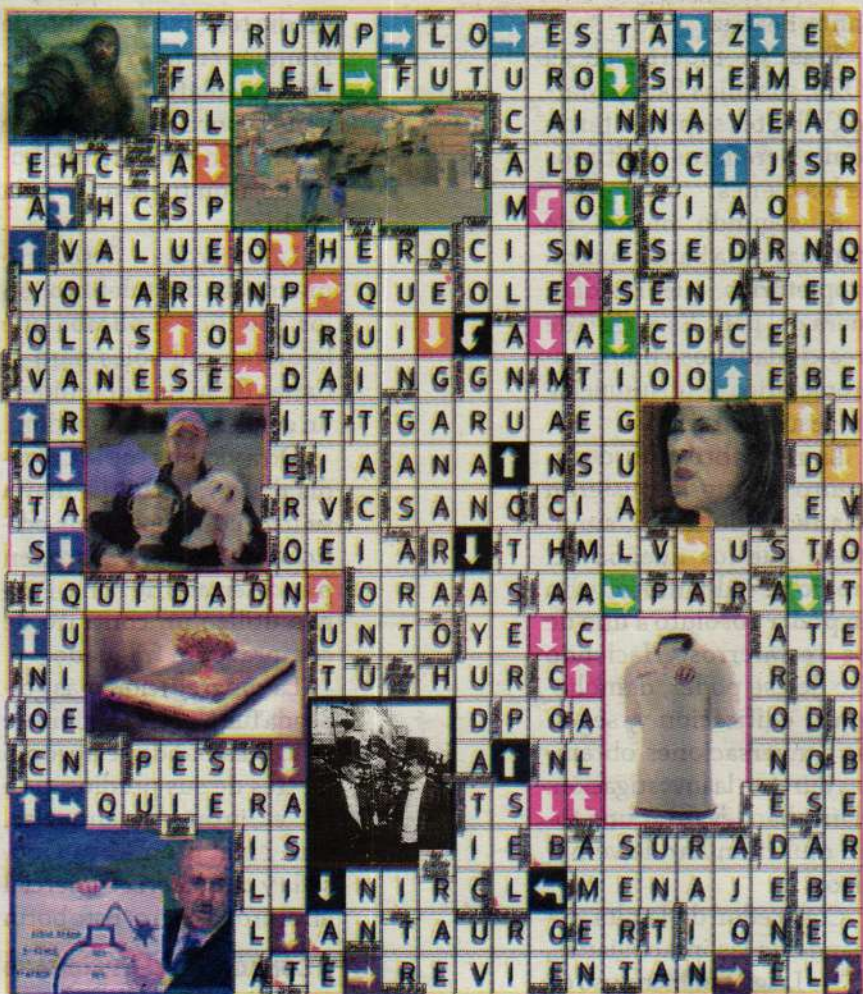
El fraude saltó en junio de 2024, cuando Hilda Pacheco descubrió que tenía una deuda con el SAT por S/ 30,000. Los hermanos intentaron negociar con la red criminal y les pidieron 5 millones de dólares. Este capítulo de usurpación terminó muy mal.

"Tío Luigi" ordenó ejecutar a Julio Pacheco y a su mano derecha, Daniel Castillo. A este último le había encargado la negociación con las víctimas y, a falta de resultados, creyó que lo había traicionado aliándose con ellos. La Fiscalía descubrió que ambos asesinatos estaban conectados.

El pasado 12 de mayo la Fiscalía de Crimen Organizado detuvo a diez integrantes de la banda, incluido el cabecilla.

"La investigación no ha terminado, vamos a rastrear las cuentas para detectar dónde terminaron las ganancias millonarias", dice Orlando Sánchez, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (Divila).

Pendograma solución anterior N°786





*Las columnas más
leídas están en*

HILDEBRANDT

en sus trece

*Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata*

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



**SEMANARIO
HILDEBRANDT EN SUS TRECE**
ES UNA PUBLICACIÓN DE PLUTÓN EDITORES S.A.C.
AÑO 17, NÚMERO 787
VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2025
DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DÍZ REY

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ, FABRICIO CABRERA BUDEN
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT, ELIA Y. DIZ **COORDINACIÓN:** ANDREA SIALER **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO,
 DOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
Tel.: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com, prensa@hildebrandtensustrece.com, www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece.
EMAIL: @ensustrece IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA JUNIO 2026

TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com, prensa@hildebrandtensustrece.com, www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece.
TWITTER: @ensustrece. IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA JUNIO 2026